

# EL CAMPO

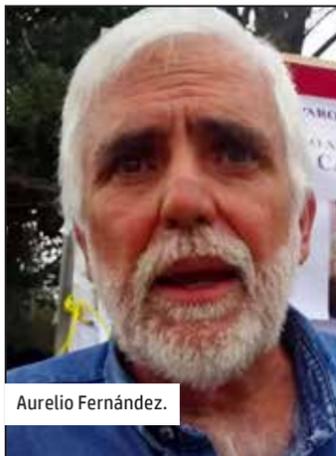
TEMA DEL MES

# EN LA 4T

**HABLAN  
PARA EL  
SUPLEMENTO**

**VÍCTOR VILLALOBOS** Sader • **VÍCTOR SUÁREZ** Sader  
**ROMÁN MEYER** Sedatu • **EMILIO GARCÍA RAN**  
**JOSÉ SARUKHÁN** Conabio • **ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA** Conacyt

## EDITORIAL



Aurelio Fernández.



Víctor Manuel Toledo

# Más sobre las políticas del “No” ¿Por qué ceder la media cancha?

**D**écadas de resistencia al neoliberalismo nos pusieron a la defensiva. Acosadas, agredidas y buscando preservar lo que tenían, las comunidades rurales aprendieron a rechazar proyectos que amenazaban su patrimonio y sus territorios. Resistencia que se combinó con reivindicaciones mínimas de salud, educación, ingreso...

Desarrollaron así una estrategia reactiva. Una respuesta básicamente conservadora a los cambios impulsados por los gobiernos anteriores que hoy les impide ver las oportunidades que ofrecen las renovadoras iniciativas de la 4T.

Así, portavoces de las comunidades zapotecas, chontales, mixes, ikoots y zoques del Istmo de Tehuantepec que, como ellos dicen, padecen “pobreza, violencia, desempleo, falta de hospitales y escuelas”, exigen que el gobierno atienda estas demandas “antes de pensar en un megaproyecto” como el transistmico (Alberto López. *Alistan amparos contra el Corredor Interoceánico*, El Universal, 23/6/19).

En consecuencia, buscaron impedir la consulta sobre un Programa de Desarrollo para el istmo que organizó el gobierno federal el 30 y 31 de marzo, y decidieron ampararse contra el decreto del 13 de junio por el que se creó el organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Es su derecho. Pero por qué contraponer la legítima exigencia de que se satisfagan necesidades puntuales, con la igualmente legítima participación en el diseño de un proyecto de desarrollo: un plan que incluirá inversiones privadas (lo que no está mal si se controla su impacto socio ambiental), pero también propuestas de interés social que antes fueron frenadas por los gobiernos federal y estatal.

Uno de estas es la urgente intervención del sistema hidrológico del que depende la existencia de la etnia Ikoot. Establecidos en los municipios de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y una agencia de Juchitán, Santa María del Mar, los Ikoot son un pueblo de pescadores cuya vida se sustenta en el sistema formado por la Laguna Superior y la Laguna Inferior, conectadas al mar, y ríos como Los Perros que las alimentan de agua dulce. El cierre de la bocanara Santa Teresa y la creciente contaminación del río, han ocasionado un serio declive de la captura de peces y moluscos, y con ello de la economía de los Ikoot.

El problema tiene remedio, pero demanda obras importantes que deberían estar consideradas en el nuevo Programa de Desarrollo de Istmo. Sin embargo, paradójicamente, una parte de los Ikoot han elegido oponerse al proyecto.

Otro caso es el de los parques eólicos; una modalidad renovable y casi limpia generar energía eléctrica, que en el Istmo ha sido combatida debido a la forma invasora y excluyente como se implementó. Y uno se pregunta: si las comunidades istmeñas descubrieron que al maíz zapalote, por su baja talla, no lo tumba el viento, por qué no aprovechar ese mismo viento estableciendo parques eólicos comunitarios.

Ya lo intentaron. En 2007 los comuneros de Ixtepec informados de que se pretendía construir ahí una subestación eléctrica, formularon un proyecto de desarrollo que incluía un parque eólico comunitario donde “cultivarían no la tierra sino el viento”. Para su diseño se apoyaron en Yansa, una fundación estadounidense, y para la tecnología buscaron a Siemens. Sin embargo el proyecto dependía de los permisos de la CFE y la Secretaría de Energía, quienes en 2012 le cerraron las puertas y dieron las adjudicaciones a trasnacionales como *Green Power* (José Gil Olmos, Pedro Matías, Marta Molina y Paulina Ríos, *La falsa ilusión de los ‘molinos de viento’*, Proceso n. 2225, 23/06/19).

Aun así, los comuneros se ampararon contra la CFE y han seguido insistiendo. El 1 de febrero de 2019 el presidente López Obrador, canceló las subastas y licitaciones eléctricas que privatizan la generación. Así que es el momento de retomar el proyecto de parques eólicos comunitarios. Pero al grito de “No a las eólicas, que son proyectos de muerte”, algunos istmeños se excluyen de un proyecto socialmente incluyente y plausible en términos de conversión energética.

No todos caen en la trampa de la autoexclusión. Los ambientalistas más consecuentes e informados señalan los riesgos ecológicos de algunos proyectos de la 4T. Pero no se erigen en profetas del “No” y acompañan sus críticas con propuestas. El Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Universidad de Puebla, por ejemplo, fue uno de los primeros en cuestionar el PIM. Pero a diferencia del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, plantea opciones. Así lo expone Aurelio Fernández:

“Me preguntaron: ¿se puede conciliar la conclusión de la obra del PIM con la solución de los riesgos que conlleva? Sí, digo, a condición de cumplir con estos requisitos: No hacer ramales de gas, usarlo únicamente en la generación de energía en Huexca; revisar en detalle el trazo del ducto [...]; garantizar la reacción al transportar el gas durante un evento volcánico peligroso; garantizar el cuidado del ducto en relación al robo de combustible; revisión del sistema de enfriamiento de las termoeléctricas; tener cuidado de otros contaminantes producidos; y, un aspecto crucial, la conciliación con los actores sociales que han participado en este proceso a lo largo de muchos años”.

Y lo mismo el Tren Maya. El año pasado Víctor Toledo, hoy secretario de medio ambiente, escribió en un artículo publicado en *La Jornada* que los efectos del Tren Maya: “dependerán del juego de fuerzas políticas, económicas y culturales que desencadene [...] Para que sea la realización de un sueño y no una pesadilla debe inscribirse en un Plan Maya por la Vida en toda la región [...] Ello supone la participación articulada de los gobiernos federal, estatales y municipales, y de estos con las comunidades, pueblos y ciudades. Dicho Plan, que debe encabezar el nuevo gobierno, debe reconocer este “conflicto civilizatorio”, ponerse del lado correcto y realizarse con la colaboración no solo de los pueblos mayas sino de los académicos, investigadores y técnicos, las organizaciones conservacionistas y las empresas sociales y privadas de la región”.

El “No”, habitualmente acompañado de juicios de amparo dirigidos a parar las obras, es una forma de autoexcluirse. Y si los planes de todos modos van -como irán- algunos de los actores sociales realmente comprometidos con la gente, pero que se opusieron sin más, quedarán fuera de la jugada, que mientras los grandes empresarios si presionan para orientar los proyectos a favor suyo. Para los equipos llaneros jugar a la defensiva y ceder la media cancha es una mala estrategia. Y más cuando con la 4T podríamos ir de gane.

Aunque algunos los ven como amenaza, los planes regionales de desarrollo pueden ser la oportunidad para detener tendencias destructivas que vienen de atrás. Porque en muchos casos los territorios que defendemos están socio ambientalmente deteriorados y urge emprender su recuperación.

La Riviera Maya es un desastre; en Cancún, Mérida y Ciudad del Carmen la urbanización salvaje es imparable; las carreteras fracturan el hábitat de la fauna peninsular; la laguna de Bacalar apesta; la soya transgénica amenaza a los apicultores yucatecos; los menonitas arrasan la selva... Entonces, el Tren Maya puede ser parte del remedio o agravar la enfermedad. De nosotros depende.

Esa es la idea de López Obrador: “El Tren Maya implica una inversión de cuarenta mil millones -dijo el presidente en Tulum, Quintana Roo- Pero antes tenemos que ordenar el territorio, ordenar el desarrollo porque ha habido mucho desorden, mucha anarquía, también abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso”.

Tomémosle la palabra. •

*A. Martha*

# La construcción de una nueva política para el campo

Héctor Robles

Hablamos de un cambio de modelo que se sustenta en las siguientes definiciones:

**1** En contraste con la política de ventajas comparativas, que significó la importación creciente de alimentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador establece la **estrategia de autosuficiencia alimentaria**, la cual ofrece las ventajas de: proteger al país ante los vaivenes del comercio internacional y las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agropecuarios; asegurar el abastecimiento de alimentos, para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales; generar un sistema alimentario propio que considere no solo la producción de alimentos, sino también las actividades inherentes a ella, como son la transformación industrial, la actividad comercial, los servicios financieros, los servicios tecnológicos; ahorro de divisas; producir alimentos con cuidado al medio ambiente, y generar mejores condiciones de vida de los productores del campo.

**2** El actual gobierno define un concepto amplio de autosuficiencia alimentaria que va más allá de la capacidad de una nación para proveer de alimento a sus ciudadanos por medio de la producción local. Por ello se propone disminuir las importaciones de semillas e insumos que en 2017 representaron 1,773 millones de dólares (agroquímicos, 734.4; fertilizantes, 1,039, y semillas, 413.2 millones de dólares) para transitar a modelos de producción sustentables y ampliar la oferta de bienes y servicios del gobierno federal a los productores rurales.

**3** En contraste con las políticas productivas de corte neoliberal que favorecieron a los grandes productores con subsidios y financiamiento de carácter productivo, la cuarta transformación pone en el centro de atención a **los sujetos colectivos rurales**; pequeños y medianos productores y a la población indígena. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoce que, a pesar de todo el embate de los gobiernos en los pasados 30 años, la propiedad de ejidos y comunidades representa la mitad del territorio. Si le agregamos la propiedad de la tierra de los in-

dígenas en sus distintas modalidades, suma alrededor del 70% del territorio nacional.

**4** Otro paradigma con el que rompe el nuevo gobierno es que deja de ver a los pequeños y medianos productores como improductivos y por lo tanto solo sujetos de la asistencia social. Por el contrario, lo primero que reconoce este gobierno es que nuestra estructura productiva descansa en **los pequeños y medianos productores**, que representan el 90% de los productores nacionales. Este sector genera la mitad de la producción nacional, contrata más del 60% del empleo pagado, es abastecedor importante de materias primas para la agroindustria del país y mantiene la diversidad genética y alimentaria que dio lugar al reconocimiento por la Unesco de la comida mexicana. Ahora se propone retomar la visión positiva de este tipo de productores pues contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición, al tiempo que desempeñan otras funciones conexas en sus territorios.

**5** Poner en el centro de la política a los sujetos colectivos, pequeños y medianos productores y población indígena requiere necesariamente acabar con el conjunto de los intermediarios del apoyo gubernamental que, en el mejor de los casos, merman los recursos destinados a estos grupos sociales. De esta realidad surge la propuesta de entregar los subsidios de **manera directa, sin intermediarios**, con lo que se combate, entre otras cosas, el clientelismo, la utilización de los pobres como reserva de votos, la desviación de los recursos públicos, el abuso de comercializadoras de agroinsumos y el burocratismo. En contraste, se genera compromiso social con los recursos públicos, pues son estos sujetos sociales, en sus asambleas, quienes avalan en qué se invierte y se responsabilizan de la buena aplicación de los apoyos públicos.

**6** Otro eje de la política hacia el cambio es la construcción de un **Sistema Agroalimentario Justo, Saludable y Sustentable**. Para ello se conformó un grupo de trabajo de las Secretarías de Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras instituciones. Particularmente, la Sader, mediante la Subsecretaría de Alimentación

y Competitividad, promueve la necesidad de producir alimentos mediante un sistema de agroecología, disminuyendo el uso de insumos químicos y revalorizando los sistemas de producción tradicionales, entre los que destaca la milpa. Combatir la obesidad y el sobrepeso impactará positivamente en la calidad de vida de quienes la padecen y además representará grandes ahorros a las personas y al gobierno, pues se requiere invertir grandes recursos en la atención de enfermedades crónicas.

**7** Una acción más es un **gobierno cercano a la gente**. El desmantelamiento de las instituciones públicas en estos últimos 30 años fue consistente y dio como resultado un aparato público totalmente atrofiado y con visiones sectoriales (cotos de poder) que no permitían articular las acciones de gobierno, más bien las enfrentaba en los territorios. Ahora se construyen los Centros Integradores del Bienestar (CIB), donde se dará una atención integral a la población. Estos centros se ubicarán a una distancia de 7 kilómetros a la redonda (o una hora de camino a pie) de la localidad más alejada, con lo que se recupera la presencia del Estado en los territorios y obliga a las distintas dependencias a articular sus acciones de gobierno (enfoque territorial).

**8** También es significativo cambiar el modelo de revolución verde por un modelo agroecológico. La revolución verde implicó: i) altos costos de producción lo que significa pérdida creciente y sostenida de la renta-

bilidad de los agricultores, pues los precios de los insumos están vinculados al precio del petróleo, al tipo de cambio y a los monopolios; ii) altos costos ambientales: deterioro y contaminación de suelos, agua y aire; pérdida de biodiversidad; iii) afectación a la salud humana: alimentos y agua con residuos de pesticidas, afectación a la salud de los trabajadores agrícolas; iv) favorece el control monopólico de nuestro sistema agroalimentario y promueve la dependencia alimentaria; v) requiere un consumo intensivo de agua y combustibles fósiles y ante el calentamiento planetario, posee muy baja resiliencia climática pues causa una alta emisión de gases de efecto invernadero.

**9** Otro cambio significativo es acabar con la pulverización de la política pública. Solo para poner un ejemplo, el Programa Especial Concurrente tenía una estructura programática de más de 150 programas y la población rural, especialmente la más pobre, solo recibía a lo mucho dos de ellos. Con los **25 programas estratégicos** del gobierno, se acabará con la duplicidad de las acciones de gobierno que favorecía a unos pocos (los intermediarios y los grandes productores), y ahora se enfocará en la población que realmente necesita el subsidio.

- Con estos criterios, el Programa Producción para el Bienestar se transformó al incorporar en sus lineamientos: acotar los apoyos hasta 20 hectáreas, con lo que convirtió al programa en progresivo de atención a pequeños y medianos productores; incorporar a 250 mil indígenas a su padrón, con lo que ahora el 32% de su padrón lo compone población indígena; pagar antes de las siembras, actualmente se tiene con orden de pago al 85% de los beneficiarios; al incorporar al PIMAF se acabó con la duplicidad de apoyos generando importantes ahorros;
- Centrarse en los cuatro cultivos básicos: maíz, frijol, trigo harinero y arroz, y construir el Padrón Único de Beneficiarios con predios georreferenciados, lo que permitirá conocer cómo se encuentran distribuidos los apoyos. El Padrón podrá ser consultado por cualquier ciudadano.

En conclusión, estamos hablando de una política transformadora para el campo que rompe drásticamente con 30 años de neoliberalismo y retoma los principios y valores de la lucha de los revolucionarios en nuestro país, especialmente de Zapata, a quien se honra al cumplirse los 100 años de aniversario luctuoso. •



# El campo en su encrucijada

Gustavo Gordillo

En el campo enfrentamos dos posibles escenarios.

## UN ESCENARIO INDESEABLE: LA DECADENCIA ADMINISTRADA

En este escenario se mantiene la continuidad de las pasadas décadas en sus cuatro ámbitos centrales: la desconexión de las políticas sociales para el campo y de las políticas de fomento productivo rural; la tendencia a favorecer con el gasto público a las regiones de agricultura más avanzadas; la fragmentación de las políticas orientadas a los pequeños productores y la ausencia de una política integral de protección y desarrollo de los recursos naturales.

El supuesto central es que el dinamismo de la agricultura comercial lograría en el agregado compensar las importaciones de granos, y que las políticas de combate a la pobreza limitarían las movilizaciones antigubernamentales en el campo.

En este escenario aumenta la brecha entre la agricultura comercial y la pequeña agricultura; se siguen deteriorando los recursos naturales y continúa la inercia de la política asistencial. Sin embargo, con un crecimiento económico similar al promedio de los pasados 20 años será difícil evitar explosiones espontáneas de descontento rural, por temas tanto sociales como productivos y ecológicos.

En este escenario se mantiene la tendencia que caracterizó a las políticas de la década de 1990 y, sobre todo, la misma teoría del cambio sustentada desde sus inicios en un supuesto central: un fuerte crecimiento de la economía y un crecimiento del sector agropecuario y forestal por encima del crecimiento demográfico, reduciría la población rural de manera sistemática para ser absorbida por el dinamismo de las ciudades —desarrollo industrial, manufacturero y de servicios. El ideal sería entonces una población rural que constituyera entre el 5 y el 10 por ciento del total.

Esta teoría del cambio enfrenta dos realidades incontrovertibles. Por un lado, el crecimiento de la economía se ha mantenido en niveles de casi estancamiento en

las pasadas tres décadas —alrededor del 2%, en promedio— y por otro, el crecimiento sectorial apenas ha sido superior al demográfico a causa, sobre todo, de la ralentización del crecimiento demográfico que pasó de 3.15% anual —con una población total de 38 millones de habitantes—, en 1960, a 1.29% anual —con un total de 127 millones—, en 2015. El crecimiento de la economía no parece que se incremente de manera considerable en los próximos años; en cambio, el crecimiento sectorial sí es probable que crezca, aunque modestamente. Los dilemas del empleo agrícola y no agrícola más las tendencias migratorias internas hacia ciudades medias, generarían importantes dilemas para las políticas rurales.

La segunda realidad, tan importante como la primera, es que esa teoría del cambio funcionó en el marco de una economía cerrada. La integración a los mercados mundiales, iniciada con la apertura comercial desde mediados de los ochenta con el GATT, y luego a partir de 1994 con el TLC —y los demás acuerdos o tratados comerciales con Europa y otros países—, modificaron sustancialmente el papel del sector agropecuario y forestal hacia un modelo que ha privilegiado el mercado externo y las exportaciones. Desde luego que muchos de esos impactos se observan en el vigoroso dinamismo de las exportaciones agroalimentarias; sin embargo, también aumentan las vulnera-

bilidades a partir de temas como las migraciones y las tendencias proteccionistas del gobierno estadounidense.

En este escenario, el papel principal lo juega un agente externo —el gobierno de Estados Unidos— con dos amenazas creíbles lanzadas desde la campaña electoral de Trump en 2016: la expulsión masiva de migrantes mexicanos y ahora centroamericanos, y la renegociación del TLC bajo la alternativa de amenazas comerciales usadas para obtener concesiones en otros ámbitos, como ya está ocurriendo.

Este escenario se desarrollaría en un contexto general de enfriamiento de la demanda internacional. El comercio agroalimentario se está reconfigurando

con tres tendencias estructurales dominantes. La primera es el afianzamiento de un mundo multipolar o globalización fragmentada que incluye un debilitamiento del papel de los acuerdos multilaterales y un potencial afianzamiento de acuerdos bilaterales. La segunda tendencia es la creciente importancia de los productos intermedios en el comercio internacional. Esto está acompañado por la emergencia de cadenas globales de valor y del comercio intra empresa. Finalmente, la tercera tendencia es hacia el proteccionismo vía medidas arancelarias y no arancelarias en el ámbito agroalimentario.

## UN MEJOR ESCENARIO: RECONSTRUIR EL CAMPO

Este escenario comienza por cuestionar las dos creencias centrales de las políticas rurales desde mediados del siglo pasado. Por una parte, una teoría del

cambio que hace una falsa equivalencia entre modernización y descampesinización, lo cual implicaba que las políticas públicas deberían favorecer a las ciudades como centros de atracción de una población rural redundante. La derivación de lo anterior fue una receta agudamente spenceriana que condenaba a los pobres del campo a seguir siendo tales, a menos que se desplazaran a las ciudades —en cuyo caso se volverían pobres urbanos—, y que escogió como triunfadores a los grandes agricultores comerciales a través de un sesgo concentrado y concentrador en esas regiones con enormes subsidios regresivos.

La teoría del cambio que encarnaría este nuevo escenario partiría, por el contrario, de reconocer las grandes transformaciones en el campo mexicano en los pasados 25 años. Revisando la estructura de ingresos de los hogares rurales en al menos la pasada década se reconoce el carácter multifuncional de los habitantes rurales, aun cuando las actividades agropecuarias, forestales y de pesca siguen teniendo un papel importante en muchos de estos hogares, ya sea contribuyendo al ingreso monetario o garantizando un grado para su suficiencia alimentaria.

Lo anterior constituiría la base para el impulso de políticas rurales que fortalezcan el mercado interno promoviendo la producción de alimentos, el desarrollo de empresas rurales, los diversos mecanismos de financiamiento rural bancario y no bancario, el adiestramiento de la mano de obra rural y la reducción de las carencias sociales, al mismo tiempo que impulsen las cadenas de valor en la agricultura más avanzada.

El eje de ese impulso estaría fincado en dos ámbitos. Uno sería rompiendo la inercia institucional, la cual reproduce la división

de funciones entre la política de protección social —administrar los programas antipobreza— y la política de fomento productivo; la inercia de los agentes y la inercia de los “beneficiarios”.

Lo anterior se lograría a través de la articulación de una política social y una política de fomento productivo reorientando al gasto público en una estrategia de desarrollo territorial a las distintas regiones y diseñando los subsidios rurales sean progresivos.

Parecería que nos encaminamos hacia este segundo escenario, gracias a que en el inicio del nuevo régimen encabezado por AMLO, los subsidios agrícolas son cada vez menos regresivos y el gasto público rural se ha claramente orientado a las zonas rurales más pobres. Pero este posible recorrido enfrenta una narrativa del actual gobierno que resulta inquietante.

Se trata de la idea de transferir recursos hacia los pobres rurales sin “intermediarios”. Desde luego la experiencia de un enjambre de redes clientelares, asociaciones y “organizaciones” que crecieron y multiplicaron alrededor la captura de recursos públicos que nunca llegaban a los supuestos beneficiarios establece sin duda un antecedente que debe ser evitado. Pero es indispensable también reconocer que eso ocurría como parte de una estrategia deliberada que buscaba desarticular a las organizaciones rurales —sobre todo en el ámbito comunitario— para reducir las demandas sociales desde la base y en cambio garantizar lealtad política. Es importante distinguir que la narrativa contra los intermediarios es un argumento en contra de las capturas de recursos públicos no en contra de las organizaciones rurales. Porque si lo fuera no tendría ninguna diferencia con el famoso *dictum* de Margaret Thatcher: no existe tal cosa como sociedad, solo existen individuos.

Tampoco deben confundirse las transferencias monetarias que son individuales —por más universales que se argumente que son— con los derechos sociales universales una de las demandas históricas de las izquierdas en el mundo. Los derechos sociales empoderan, es decir impulsan a los individuos a que se organicen desde la base. Los programas de transferencias monetarias articuladas desde las comunidades pueden en cambio convertirse en un poderoso instrumento que combata la fragmentación social y reconstruya los vínculos sociales en el campo, sentando las bases para lo que deberían ser derechos sociales universales —salud, alimentación, educación, medio ambiente sano; entre los más importantes. •



Iguana. Francisco Toledo



Algunos agroquímicos que ya están prohibidos en otros países se siguen usando en México, reconoce Víctor Villalobos. Cortesía SADER

## ENTREVISTA A VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS

# “Un campo con más visión ambiental y con el foco de atención en los productores pobres”

Gerardo Suárez, Enrique Pérez y Cecilia Navarro

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural enfrenta una transformación profunda y no cosmética. No solo cambió el nombre, también está cambiando el enfoque para impulsar la producción de alimentos en el país. “El encargo que me hizo el presidente de la República es hacer un país más productivo con mayor responsabilidad ambiental y más inclusivo, en el que el foco de atención son los productores más pobres”, resalta el titular de la Secretaría de Agricultura, Sader, Víctor Manuel Villalobos.

Sin embargo, a pesar de eso y del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir los transgénicos, el funcionario reconoce que se continúa y se continuará importando soya transgénica y maíz amarillo transgénico, por una serie de razones: precio, incapacidad del país para producir esos productos en las cantidades necesarias y el abandono del sector durante décadas. En esta entrevista, habla de los retos, los compromisos y los pendientes de la Sader, dependencia en la que recaen varios de los objetivos prioritarios de la actual administración.

El 50 por ciento de los recursos de la dependencia se entregarán a los productores más pobres a través de los programas prioritarios como Producción para el bienestar, Crédito ganadero a la palabra y Precios de garantía. Se trata de saldar una deuda histórica con los productores más desfavorecidos del medio rural.

Para el secretario de Agricultura “el campo mexicano se divide en dos países: el del centro al norte, que es muy productivo, agroindustrial que ha sido muy apoyado y beneficiado; y el del centro hacia el sursureste, muy pobre, no tan productivo, aunque con una enorme riqueza en términos de suelos, clima y cultura.”

Refiere que, de acuerdo con la visión del presidente de la República, “tenemos que ver a todos los campesinos como productores, pero no podemos tener políticas públicas parejas, uniformes, de forma nacional. Tenemos que avocarnos en hacer políticas de fomento para el sursureste, o hacia el sector más pobre de la sociedad rural, que coincidentemente se encuentra

en esa región del país, donde el 81 por ciento de la población rural vive de la agricultura de autoconsumo”.

### Dependencia de importaciones y transgénicos

Para el secretario lograr la autosuficiencia alimentaria y la reactivación productiva del campo mexicano no es sencillo, ya que el campo mexicano padece un abandono de muchas décadas en las que no se ha hecho investigación ni extensionismo rural, “esto ha propiciado que utilicemos agroquímicos altamente tóxicos y fertilizantes en grandes cantidades sin sustento técnico ni conocimientos fundamentados, y que por eso se deterio-

ren los suelos y se contaminen los cuerpos de agua,” explica en entrevista para *La Jornada del Campo*.

Otra de las consecuencias de no haber invertido en investigación y extensionismo, puntualiza, es que no contamos con estudios de suelos ni con variedades de diversos cultivos que nos permitan salir de la dependencia de importaciones de alimentos como el maíz amarillo, del cual compramos al extranjero, cada año, 16 millones de toneladas.

Alrededor del 80 por ciento del maíz amarillo que ingresa al país es transgénico, de pésima calidad y tiene aflatoxinas. “No podemos comprar maíz amarillo en el exterior que no sea transgénico, porque no se oferta. Los principales productores son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Nueva Zelanda y lo producen transgénico”, detalla el funcionario.

Añade que si quisiéramos pedir maíz amarillo que no sea transgénico tendríamos que pagarlo con un sobreprecio de entre el 40 y 50 por ciento y los principales perjudicados por esos incrementos en el costo sería la población más pobre, debido a que el maíz amarillo se utiliza para las industrias avícola, porcícola y ganadera, y puesto que las proteínas más baratas son el pollo y el huevo los precios se elevarían y perjudicarían directamente a los consumidores.

Víctor Villalobos plantea que, si quisiéramos producir ese tipo de maíz en México tendría un mercado muy grande, porque las grandes industrias lo demandan, sin embargo, no contamos con las variedades adecuadas para producirlo. Esta es otra consecuencia del abandono a la investigación y desarrollo de variedades de maíz amarillo.

“Como durante muchos años se privilegió la producción de maíz blanco en el país, tendríamos que reconvertir superficies de cultivo a estas otras variedades y éstas deberían ser igual de competitivas como las del maíz blanco que producen en Sinaloa, con rendimientos de entre 10 y 12 toneladas por hectárea. De otra

forma no sería rentable para los agricultores.”

Lo mismo ocurre con la soya, otro de los cultivos de los cuales México es altamente deficitario. El 80 por ciento de la soya se importa y también es transgénica. “Como en México está prohibida la soya transgénica y no hay mejores variedades que sean rentables y productivas, también la vamos a seguir importando y transgénica,” subraya.

### Agrotóxicos sin medida

La falta de un verdadero sistema de extensionismo rural con bases fundamentadas en la investigación ha propiciado muchos problemas en el sector agropecuario mexicano, como el uso desmedido de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes.

Víctor Villalobos indica que “nosotros estamos conscientes y hemos señalado que no se ha hecho una revisión de los inventarios de algunos agroquímicos que ya son caducos, que incluso ya están prohibidos en otros países y acá en México se siguen aplicando. Tiene que ser la Cofepris quien revise la lista y que la someta a revisión de Agricultura, de Semarnat y de Economía, y los caducos y altamente tóxicos tenemos que sacarlos del mercado.

Un ejemplo de estos componentes caducos y muy dañinos, subraya el funcionario, “es el malatión, conocido como ‘mata todo’, es altamente tóxico, es veneno que afecta mucho y que no se descompone porque son moléculas muy estables, entonces contamina suelos y acuíferos y daña a la salud.” Este componente aún se utiliza mucho y sin mayor regulación en el país.

Su propuesta es la promoción de la extensión agrícola para utilizar componentes más sostenibles, saludables y reducir el uso de productos nocivos. “Es muy importante trabajar con los productores en medidas de salud, porque en ocasiones las personas utilizan los recipientes de los agroquímicos para transportar agua para preparar la comida o consumirla, eso es muy dañino”.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)

“Tenemos que ver a todos los campesinos como productores, pero no podemos tener políticas públicas parejas, uniformes, de forma nacional. Tenemos que avocarnos en hacer políticas de fomento para el sursureste, o hacia el sector más pobre de la sociedad rural, que coincidentemente se encuentra en esa región del país, donde el 81 por ciento de la población rural vive de la agricultura de autoconsumo”. *Víctor Villalobos*

ENTREVISTA A VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

# Producción para el Bienestar, programa estratégico para la autosuficiencia alimentaria



"Es prioritario para esta Subsecretaría que la producción del campo se encamine hacia un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable". Cortesía SADER

Cecilia Navarro

**El programa reemplaza a Proagro Productivo (antes Procampo) e incluye cambios sustanciales que transforman lo asistencial en productivo, orientan los apoyos hacia el sur-sureste e incorporan a productores de comunidades indígenas**

**Este programa incorpora a productores de café y caña de azúcar, e impulsa prácticas agrícolas sustentables. La intención es elevar producción y productividad sin dañar el medio ambiente**

En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera conduce la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad –en proceso de transformarse en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, denominación que, dice él, marca la ruta de trabajo y los retos y ambiciones de esta instancia.

Esta Subsecretaría tiene a su cargo el programa Producción para el Bienestar, uno de los ejes prioritarios de la Cuarta Transformación.

Con la apuesta de construir la autosuficiencia alimentaria nacional y, prioritariamente, las condiciones para que los propios productores mejoren la oferta alimentaria para ellos y sus familias, el programa entrega apoyos directos, sin intermediarios, a los productores de granos del país –granos básicos para la alimentación del pueblo mexicano, como maíz, frijol, trigo harinero y arroz, entre otros– y lo hace en fechas previas a las siembras, situación nunca vista en Procampo/Proagro Productivo, programas antecedentes de Producción para el Bienestar.

Victor Suárez detalla en entrevista los pormenores de este programa, sus alcances, sus metas y avances.

*¿Cuál es el origen de Producción para el Bienestar?*

Este programa surge ante la urgencia que tiene México de avanzar en la autosuficiencia alimentaria, pues es apabullante la dependencia de importaciones que hoy tenemos tanto en alimentos como en insumos y maquinaria agrícola; esa dependencia creció muy rápidamente con la apertura unilateral e indiscriminada que permitieron los gobiernos neoliberales desde la década de los 90.

Durante 2013-18 México importó 120 millones de toneladas de los cinco cultivos considerados estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo). Eso representa más o menos la mitad de nuestro consumo interno. En 2018 las importaciones de alimentos y de insumos y medios de producción (como semillas, fertilizantes y maquinaria) sumaron alrededor de 380 mil millones de pesos, esto es tres veces el presupuesto de las Secretarías de Bienestar y de Agricultura.

**Las importaciones descontroladas han vulnerado la soberanía de nuestro país, a la par del daño que infringe la dependencia energética, y han despojado a nuestros productores de competitividad y de espacios en el mercado, pues deben enfrentarse a una oferta que viene con *dumping* y altamente subsidiada por la Tesorería de Estados Unidos, nuestro principal proveedor de alimentos del extranjero.**

La situación es particularmente difícil para los productores de pequeña escala, muchos de los cuales nunca, hasta ahora, habían recibido un solo apoyo gubernamental de fomento productivo.

Este dato es clave si se considera que los productores de pequeña escala (con predios de hasta 5 hectáreas de temporal y hasta 0.2 hectáreas de riego) y los de mediana escala (con predios de hasta 20 hectáreas de temporal y cinco de riego) son los que tienen mayor potencial de elevar su productividad, sus rendimientos por hectárea, pues no han tenido en el pasado elementos técnicos suficientes para mejorar sus prácticas agronómicas. Hay allí un potencial latente muy poderoso.

*¿En qué consiste Producción para el Bienestar?*

El programa fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 8 de febrero en Huetamo, Michoacán. En ese entonces el programa contaba con tres vertientes; en mayo se suma-

ron otras dos: apoyos directos a caficultores y a productores de caña de azúcar.

La primera implica al padrón de beneficiarios de Proagro Productivo 2018, que son productores de granos, particularmente maíz, frijol, trigo harinero y arroz. Y se hizo un ajuste sustancial. Proagro dio apoyos orientados a predios de hasta 80 hectáreas; Producción para el Bienestar acotó el apoyo a productores pequeños y medianos, con cuotas diferenciadas: mil 600 pesos por hectárea para los pequeños y mil pesos por hectárea para los de mediana escala. Nuestro padrón aquí es de un millón 259 mil 879 productores, con un total de predios de un millón 884 mil 486 y una superficie total de 4 millones 764 mil 109 hectáreas. Prácticamente todos estos productores han recibido ya su apoyo de Producción para el Bienestar.

Una situación novedosa es que el apoyo se entrega antes de las siembras, lo cual permite a los productores invertir en sus predios de forma oportuna. Desde que en 1994 nació Procampo y hasta 2018 hubo un reclamo constante de los productores por recibir sus apoyos a tiempo para comprar insumos y servicios relacionados con la siembra. Ahora eso es una realidad. **Así, se hace un contraste muy importante. Procampo/Proagro fue un programa asistencialista y Producción para el Bienestar es un programa de fomento productivo, impulso productivo y centrado en los pequeños y medianos productores.**

La segunda vertiente implica a quienes fueron beneficiarios de PIMAF en 2018 (productores de maíz y frijol con hasta tres hectáreas). Lo que hicimos fue corroborar que las personas que estaban en el padrón de PIMAF efectivamente existieran y fueran productores. El resultado fue que solo un tercio del padrón cumplió con los requisitos.

**VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>**

**Hoy pequeños productores de maíz y frijol de zonas indígenas y pobres podrán colocar sus excedentes de cosechas en las bodegas de Segalmex con precios de garantía. Por primera vez en la historia se considera a los productores indígenas como sujetos de la política pública y se les dota de instrumentos materiales para que esto se concrete.**



Guía alimentaria canadiense.

# Política alimentaria canadiense, camino a seguir

**Víctor Suárez Carrera** Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, Sader

El pasado 17 de junio el gobierno de Canadá anunció su primera Política alimentaria federal, la cual aborda fórmulas para atender en el país los principales retos globales de la alimentación de una forma integral. Su propuesta va desde trabajar para generar una oferta suficiente en regiones con pobreza y hambre, hasta reforzar la calidad y sanidad para los mercados extranjeros pero también en los domésticos, y considera el fomento al consumo de productos locales, nacionales, con una etiqueta que así los identifique; el abatimiento del desperdicio, y los conceptos de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente diversos.

Esta política, que también busca hacer frente al engaño a los consumidores y a la competencia desleal entre empresas (que se cometen con etiquetados incorrectos y otros fraudes), fue construida a partir de una encuesta realizada por vía electrónica en 2017 a más de 45 mil productores y procesadores de alimentos,

expertos en medio ambiente, salud y seguridad alimentaria, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales y defensores de la comunidad.

Para México una experiencia así es como agua fresca, sobre todo cuando proviene de un país socio en el TMEC y con el cual compartimos una vecindad muy importante, la que tenemos con Estados Unidos, potencia agrícola global y nuestro principal abastecedor externo de materias primas agrícolas y alimentos (con muchos aspectos debatibles, como es el dumping, los subsidios, la tendencia a los alimentos hiper industrializados, la producción de cultivos transgénicos, etcétera).

Es como agua fresca porque desde la Secretaría de Agricultura estamos haciendo esfuerzos coordinados con otras instancias del gobierno federal, como las Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Educación y Economía y el Instituto Nacional de Salud Pública, y con organizaciones de la sociedad civil como El Poder

del Consumidor, para construir un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable.

Esto es un sistema que vincule las políticas, programas y acciones en materia agropecuaria, con las de salud, medioambientales, educativas y de corte social, de forma tal que estemos todos en el gobierno en una misma sintonía e impulsemos materias primas agrícolas producidas con el mayor cuidado posible de nuestros recursos agua y suelos y de los ecosistemas y con el cuidado de excluir agrotóxicos y pesticidas de alta peligrosidad; materias primas que contribuyan así una alimentación que sea suficiente (en principio para los propios productores y luego para el conjunto de la población) y que sea nutritiva, saludable y con calidad.

Entre los factores que hemos discutido en un grupo intersecretarial para avanzar en la búsqueda de este sistema está la necesidad de fomentar la mejora de la infraestructura y las condiciones de ocupación en las zonas rurales, la atención prioritaria de grupos vulnerables rurales y urbanos, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la provisión de atención médica gratuita.

Más adelante en este texto describo acciones puntuales de la política alimentaria canadiense anunciada, lo que muestra cómo coincidimos en nuestras preocupaciones e intereses por tener políticas holísticas, integrales que conecten producción agrícola con alimentos saludables, infraestructura rural con mayor oferta alimentaria y abatimiento de la pobreza, lo rural con lo urbano, producción local con consumo local y nacional, etcétera.

## Visión integral

La nueva política alimentaria de Canadá tiene una visión de integralidad y la información con que se difundió señala que llega a alinearse con los objetivos de otras iniciativas y políticas federales de ese país, como la Asociación Canadiense de Agricultura, la Estrategia de Alimentación *Healthy* y la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Asimismo, prevé la coordinación del gobierno con provincias y organizaciones no lucrativas para la creación de un Programa Nacional de Alimentos Escolares. Muestra así una visión que abarca la producción del campo; la atención alimentaria a niños y estudiantes y a personas que viven en espacios rurales de pobreza; la mejora en los estándares de calidad y sanidad –de por sí reconocidos en los mercados de exportación de este país–, y el reforzamiento de lo cultural, lo local y lo nacional en las elecciones de los consumidores, entre otros factores.

Vale la pena destacar aquí algunas de las motivaciones de la nueva política canadiense de alimentación, expresadas en los mensajes con que se hizo pública.

- “El sector de alimentos de Canadá es responsable de uno de cada ocho empleos en todo el país; es una fuente inagotable de la economía, especialmente en nuestras comunidades rurales. Sin embargo, demasiados canadienses no pueden acceder de manera confiable a suficientes alimentos saludables. Demasiados niños están aprendiendo con el estómago vacío”.
- “Canadá desperdicia más de 11 millones de toneladas de alimentos cada año, por un valor de casi 50 millones de dólares canadienses”.
- “Uno de cada ocho hogares canadienses actualmente experimenta inseguridad alimentaria, lo que significa que no tienen acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados. La inseguridad alimentaria es aún más pronunciada en algunos segmentos más vulnerables de la población (por ejemplo, hogares de bajos ingresos con niños; uno de cada dos hogares en Nunavut)”.
- “El sistema alimentario de Canadá es resistente e innovador, sostiene nuestro medio ambiente y apoya nuestra economía”.

Acciones específicas de la nueva política canadiense:

- El gobierno de Canadá está invirtiendo 134 millones de dólares canadienses en el Presupuesto 2019, que incluye nuevas iniciativas para ayudar a lograr los objetivos clave de la Política Alimentaria federal.
- Se crea un Consejo Asesor de Políticas de Alimentos de Canadá. El Consejo reunirá la experiencia y la diversidad necesarias más allá del gobierno para abordar los desafíos actuales, así como el futuro del sistema alimentario de Canadá. Un proceso abierto y transparente, que incluye cartas de nominación, comenzará durante el verano.
- Se crea un Fondo de Infraestructura Alimentaria Local de cinco años y 50 millones de dólares canadienses, diseñado para apoyar proyectos dirigidos por la comunidad que mejoren el acceso a alimentos seguros, saludables y culturalmente diversos. A partir del 15 de agosto de 2019, se invitará a las organizaciones elegibles a presentar una solicitud a través del primer período de admisión para fondos no reembolsables de hasta 25 mil dólares canadienses.
- Se genera una nueva campaña canadiense de marca *Brand and Buy Canadian* que tendrá como objetivo aumentar el orgullo y la confianza del consumidor en la comida canadiense.
- Habrá apoyo a proyectos dirigidos por la comunidad, como invernaderos, congeladores comunitarios y capacitación en habilidades que aborden los desafíos alimentarios y la inseguridad alimentaria en las comunidades aisladas y del norte del país.
- Se crea un fondo para apoyar las ideas más innovadoras de reducción de desperdicio de alimentos en el procesamiento de alimentos, la venta al por menor de comestibles y el servicio de alimentos.
- Habrá nuevos fondos para ayudar a la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos a combatir el fraude alimentario, el etiquetado incorrecto y la tergiversación de productos alimenticios, para proteger a los consumidores del engaño y a las empresas de la competencia desleal; y
- Se tomarán los primeros pasos para trabajar junto a las provincias y organizaciones sin fines de lucro hacia la creación de un Programa Nacional de Alimentos Escolares.

# El dilema de las organizaciones campesinas en la 4T

Ubaldo Mendoza

“En este gobierno todos los apoyos serán entregados directamente a la gente, sin intermediarios” ha repetido una y otra vez el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Estos dichos han causado estupor entre los diversos grupos y frentes organizados.

La postura de AMLO frente a las Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) no es un asunto nuevo. En diversos eventos privados y públicos ha manifestado su “descontento” con ellas. No cree en ellas, o en algunas de ellas, y eso hace pensar al presidente que todas, absolutamente todas, son “corruptas”. Sin embargo, durante su carrera política, el hoy presidente ha trabajado con diversas organizaciones. No es ajeno al trabajo organizado: “solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo”. Se podría decir que su escalada al gobierno viene acompañada por un sinfín de procesos organizativos.

Durante el periodo neoliberal surgieron infinidad de siglas por doquier, campesinas, indígenas, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas, sindicales, de maestros, de bomberos, contra los megaproyectos y en defensa del territorio. Sería un milagro que alguien pudiera contar el origen y la historia de estas organizaciones. Muchas, infiltradas y aliadas de los gobiernos corruptos del pasado. Como se dice coloquialmente “haciéndole el caldo gordo al poder”. Cada quién sabrá.

¿Generaliza? Definitivamente, sí. ¿Le falta razón? No. Sin duda algunas OSC han sido fundamentales en muchos de los cambios logrados en favor de la gente. Pero se tiene que reconocer que muchas OSC han abusado, hasta saciarse.

Ahora que estamos en los inicios de una nueva era en México, donde la transparencia parece ser el eje de las definiciones, podría considerar el presidente de investigar a “las corruptas”, denunciar y castigar. Indicios hay bastantes y, sacar del costal, a otras organizaciones, que, si bien no son “puras”, hacen un trabajo interesante.

**Organizaciones campesinas, ¿transformarse o morir?**

En el mar de siglas están las organizaciones campesinas. Las hay de todo tipo. Las “históricas”; las “radicales”; “las conservadoras”; “las cínicas”; “las puras”; “las buenas”; y las “de siempre”. Durante el foxismo se dio el auge más representativo de la formación de organizaciones. No olvidemos que al Partido Acción Nacional (PAN) era el partido en el poder. La más sonada y promocionada fue la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (UNIMOSS), cuyo dirigente es, fue y será Javier López Macías. De funcionario público a dirigente campesino. Hoy, dicha organización se jacta de ser “crítica” de las políticas hacia el campo de la cuarta transformación. Y, como UNIMOSS, surgieron infinidad de siglas. Quizá el campo sea el sector con más siglas. Hay divisiones entre ellas. Ahora, en muchos “frentes campesinos” participan dichas escisiones campesinas. Participan “juntas, pero no revueltas”, dicen. Muchas, de estas fracturas se dieron desde los gobiernos, por la disputa del presupuesto, pocas divisiones se han dado por cuestiones ideológicas.

En la historia de las luchas campesinas han proliferado frentes organizativos donde se pretende ser más fuertes a la hora de impulsar políticas públicas a favor de la gente y, muchas veces para servir con la cuchara grande. Organizaciones que se dicen ser “de izquierda” han pervertido el sentido de la organización. Dirigentes campesinos con chofer, alhajas, botas “fifi”, carrazos... Dirigentes convertidos en verdaderos “caciques” y “extorsionadores” de su organización. Sin generalizar, la organización campesina fue pretexto para el control, la cooptación, el chantaje y la simulación.



Organizaciones: cambiar o desaparecer...

Espacios diversos de organización campesina han sido factor de cambios importantes y profundos en el sector. Gente que ha encontrado en la organización campesina el escaparate perfecto para sacar adelante “sueños y anhelos” de tener un campo sin pobreza. Al final, como en la vida, hay matices y no se puede estigmatizar a todos por algunos.

Desafortunadamente las malas prácticas han sido factor también para que mucha gente haya sido engañada, manipulada. Siendo carne de cañón de los dirigentes, funcionarios y gobernantes. Utilizar a la gente como clientes y no como sujetos de derechos.

Hoy la gran mayoría de las organizaciones campesinas, de todos sabores y colores, están realmente “enojadas”; “desconcertadas”; algunas ajenas totalmente a lo que se está viviendo México. La famosa circular número 1, del pasado 14 de febrero del presente, dice “... hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción...” ([www.proceso.com.mx/572198/amlo-notifica-a-sugabinete-no-transferian-ningun-recurso-a-ong-o-sindicatos](http://www.proceso.com.mx/572198/amlo-notifica-a-sugabinete-no-transferian-ningun-recurso-a-ong-o-sindicatos)), lo que causó “ámpula” en muchas organizaciones campesinas.

En lo que va de la 4T se han realizado infinidad de reuniones

**El neoliberalismo utilizó a muchas de las siglas como aval de sus políticas anticampesinas. Cientos de miles de millones de pesos se han destinado al campo. La presión por un mayor presupuesto rural se convirtió en simulación.**

**Con el gobierno actual hay indicios positivos de que la transformación va “en serio”, sin contemplación alguna. Hay otros indicios, sin embargo, de que la inercia se apodera de la 4T.**

sobre ¿qué papel debe jugar la organización campesina en este gobierno?”. Aquí la gran pregunta sería ¿qué quieren las organizaciones campesinas? ¿Dinero? ¿Folios? ¿Prebendas? O, ¿construir una política para el campo radicalmente distinta a la de los gobiernos neoliberales? El neoliberalismo acostumbró y enajenó a un sinfín de organizaciones a la realización de proyectos “productivos”; “de financiamiento” “de capacitación”... Las organizaciones y los funcionarios en turno pervirtieron el “apoyo” a la organización. Si bien muchos de los avances obtenidos en el campo se deben, en parte, a ese apoyo, hoy muchos de estos proyectos están en el olvido y el en fracaso. El neoliberalismo utilizó a muchas de las siglas como aval de sus políticas anticampesinas. Cientos de miles de millones de pesos se han destinado al campo. La presión por un mayor presupuesto rural se convirtió en simulación.

Los espacios “oficiales” de participación, organizaciones-gobierno, como el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), se convirtieron en pases de lista para la entrega del folio de los proyectos, por poner un ejemplo. Este espacio fue concebido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), durante el foxismo. En más de 18 años de existencia, este consejo ha mezclado lo mejor y lo peor de las organizaciones campesinas.

Hoy este consejo sobrevive. Con los variopintos de personajes que se presentan ahí. Es común observar a los más siniestros personajes del campo mexicano.

Gritos, sombrerozcos, insultos, descalificaciones, entre unos y otros. Un muro de lamentaciones. De poca participación genuina y transformadora.

Durante las sesiones, comentan diversos participantes, se ha escuchado una y otra vez la necesidad de “reestructurar” el CMDRS. Inclusive, dicen que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, se refirió a la necesidad de reestructurarlo. Unos hablan de la depuración, otros de la incorporación de más organizaciones; otros dicen que “no van a permitir ninguna imposición desde el gobierno”; otros fundamentan sus palabras en los artículos de la LDRS y otros “luchan” por las convocatorias de los respectivos programas gubernamentales. Hoy en ese espacio se ha creado una comisión de 28 participantes (14 funcionarios de la Sader y 14 de las organizaciones participantes), con la intención de ponerse de acuerdo sobre el papel que debe jugar dicho Consejo.

Los apoyos directos a los productores y a la gente han sido motivo de debate y discusión. Sin embargo, el presidente y el nuevo gobierno deben comprender que la organización “desde abajo”, “económica”, “política y social” es necesaria para las transformaciones que se requieren en el campo.

Pase lo que pase con el gobierno actual hay indicios positivos, de que la transformación va “en serio”, sin contemplación alguna. Hay otros indicios, sin embargo, de que la inercia se apodera de la 4T. •

# No se trata de dinero, sino de políticas y apoyo claro para pequeños y medianos productores: ANEC



Urge reconocer la importancia de los medianos productores.. Enrique Pérez / ANEC

**Leticia López Zepeda** Directora Ejecutiva de ANEC  
**Enrique Pérez** Coordinador de Comunicación de ANEC

“Así como en las tempestades se miden los marineros, en los tiempos borrascosos florece la creatividad popular. Y los treinta años recientes han sido sumamente turbulentos para los campesinos mexicanos. Quizá por ello en ese lapso nacieron y se desarrollaron importantes y novedosas iniciativas de organización rural, entre ellas la ANEC (...).”

22 años abriendo brecha. Rosario Cobo, Lorena Paz Paredes y Armando Bartra.

Los pequeños y medianos productores de granos básicos han sido uno de los sectores más afectados desde la imposición del modelo neoliberal en 1982. La entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) arrasó con la agricultura campesina. La guerra contra el campesinado estaba en marcha. La política neoliberal se enfocó en denigrarlos, al considerarlos “atrasados”, “pobres”, “improductivos”; quitándoles el derecho de ser vistos como sujetos productivos y como sujetos históricos en la construcción de las decisiones del país.

Los saldos de las políticas neoliberales en el sector rural son desastrosos: colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes corporaciones agroalimentarias. Tanto las que acaparan y especulan con las cosechas como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos. Por eso, hoy importamos la mitad de lo que comemos y en el campo hay po-

breza, malnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia. Por ello, entre otras causas, el gobierno de la cuarta transformación se ha volcado decididamente a desterrar al modelo neoliberal.

Durante años los pequeños y medianos productores fueron excluidos de las políticas públicas. Sin embargo, los productores desarrollaron estrategias, resistencia que les han permitido sobrevivir a las adversidades.

Se organizaron e implementaron sistemas alternativos de producción, crearon organizaciones, generaron empleo, alimentos sanos e intentaron reestablecer el tejido social.

Con el gobierno de la cuarta transformación los pequeños y medianos productores están en el centro de las políticas públicas hacia el campo, bajo la premisa de que la agricultura campesina debe ser la que alimente a México.

Héctor Robles afirma que es indispensable poner en el centro de atención a la agricultura de pequeña y mediana escala por 4 razones fundamentales: i) la importancia que tienen estos productores para el país; ii) los signos de agotamiento que presenta el campo mexicano, reflejados en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad; iii) la ineficiencia en el gasto público dirigido al sector rural, y iv) los programas implementados en varios países de América Latina y el mundo en favor de la agricultura en pequeña escala.

La política inicial o de primer piso implementada en estos 7 meses de gobierno, para rescatar

al campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria se basa principalmente en los 5 programas prioritarios (producción para el bienestar, precios de garantía-canasta básica, crédito ganadero a la palabra, entrega de fertilizantes-biofertilizantes y pesca) con el objetivo de aumentar la producción alimentaria sustentable y fortalecer la economía campesina, indígena y afromexicana.

Durante todo el periodo neoliberal los grandes agricultores fueron los mayores beneficiarios. Diversas investigaciones señalan que el 10 por ciento de las Unidades de Producción Rural (UPR) mayores de 20 hectáreas recibían el 65 % de los subsidios productivos canalizados por el gobierno federal, mientras que las UPR con 5 hectáreas o menos, que representan el 70 por ciento de las UPR y que contribuyen con el 40 por ciento de la producción agropecuaria y el 60 por ciento del empleo rural nacional, únicamente recibían el 17 por ciento de los subsidios de la vertiente productiva del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC Rural).

Por ello es muy importante, que por el bien de todos “primero los pobres”. En este sentido, el apoyo decidido a los pequeños productores de menos de 5 hectáreas ubicados en zonas deficitarias y marginadas, así como la incorporación de 250 mil productores indígenas es un reconocimiento a los pequeños y medianos productores como sujetos de derechos, económicos, productivos y sociales. Es plausible la intención de erradicar la corrupción, el clientelismo y el corporativismo en el campo. Aunado a estos programas, la prohi-

bición de las semillas transgénicas da muestra de que el gobierno de López Obrador está comprometido con la gente del campo.

Si bien los programas prioritarios son importantes, resulta preocupante que el resto de la política pública de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), no se vincula a estos 5 programas y además muestran signos inerciales y falta de claridad respecto a cómo se operarán los diversos presupuestos asignados.

La entrega de recursos y apoyos de manera directa a los productores más pobres es una acción justa, es indispensable que se considere a los PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES que producen para el mercado en los esquemas de apoyo, como es el caso del Ingreso Objetivo. En este mismo sentido y para alcanzar la autosuficiencia alimentaria se requiere de la participación organizada de los pequeños y medianos productores, bajo modelos de agricultura sustentable, agroecológica, nutritiva y sin transgénicos.

La nueva coyuntura en la que se encuentra México es una oportunidad para todas y todos. Es necesario “radicalizar”, defender y construir nuestras propuestas, alternativas e iniciativas.

Los hombres y mujeres del campo demandan su derecho a seguir cosechando alimentos sanos para todas y todos, generando empleo para millones, cuidando a la naturaleza, enriqueciendo la cultura. Los campesinos asumen su responsabilidad con el futuro de México y están decididos a cumplirla. •

## UNA RUTA DE ACCIÓN PARA LA 4T

Para estimular la productividad entre los pequeños y medianos productores no se requieren de recursos adicionales; se necesitan políticas firmes y de justicia para la población y para la producción rural nacional y para que el mercado pague adecuada y suficientemente los alimentos sanos y nutritivos que produce este sector. Esta política debe considerar:

- Reconocer la importancia de la agricultura en todas sus dimensiones.
- El ejido y la comunidad deben ser el centro de las políticas públicas para el campo.
- Reconocimiento y apoyo a la organización campesina y a las formas asociativas de producción y mercadeo.
- Impulsar políticas públicas integrales de fomento productivo; desarrollo de infraestruc-

tura; acceso a insumos básicos como agua, energía, semillas, maquinaria, entre otros.

- En pocas palabras, necesitamos que la soberanía alimentaria y nutricional sea una política de Estado sustentada principalmente en la pequeña y mediana producción agropecuaria, con planeación estratégica y desarrollada con participación social tanto de productores como de consumidores; política de Estado orientada bajo criterios agroecológicos. Se requiere un cambio paradigmático de modelo de agricultura, en el marco de la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional.
- Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de las cosechas.
- Es preciso pasar de “una agricultura de insumos” a una

“agricultura de conocimientos integrados en sistemas complejos” con base en las pequeñas y medianas unidades de producción rural.

- Administración de importaciones de alimentos.
- Control fitosanitario.
- Control de transgénicos.
- Reservas estratégicas de alimentos.
- Revaloración de los maíces nativos.
- Etiquetado frontal de productos formulados con transgénicos y alimentos chatarra.
- Prohibición de entrada de semillas transgénicas.
- Congruencia y articulación de leyes que impulsen la producción

de maíces nativos, producción de bioinsumos campesinos, intercambio libre de semillas campesinas y contra los monopolios que atentan contra los intereses campesinos e indígenas y la Nación.

- Acciones contra las prácticas anticompetitivas y la alimentación chatarra (prohibición de su venta en escuelas públicas; prohibición de publicidad engañosa en alimentos, comida sana en escuelas, en mercados de productores, asociaciones de compra consumidores-productores.
- Se requiere un programa nacional tecnológicamente innovador y ajustado a las diferentes regiones agroecológicas, que impulse decididamente la milpa, el solar, la huerta y el potrero. Es decir, el tradicional complejo productivo campesino generador de autoabasto y excedentes comercializables, además de empleo remunerador y atractivo para los jóvenes.



La Sedatu busca dar seguimiento a los acuerdos que se toman en las asambleas. Enrique Pérez / ANEC

## ENTREVISTA A ROMÁN MEYER FALCÓN

# Impedir el despojo de los territorios ejidales, mandato de la Sedatu

Gerardo Suárez

Las regiones rurales concentran la población con mayores rezagos en términos de desarrollo y bienestar. A pesar de que el 52% del territorio nacional es propiedad de comunidades y ejidos, es en estos lugares donde se acentúan la pobreza y marginación. “Tenemos una deuda histórica con la población que habita en los núcleos agrarios y nuestra vocación como Estado mexicano es proteger sus intereses y evitar procesos de despojo de sus territorios”, asegura Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu).

Indica que los núcleos agrarios rurales enfrentan dos retos muy importantes, por una parte, avanzar en un proceso de relevo generacional puesto que los titulares de los derechos agrarios tienen una edad avanzada, lo que les impide seguir trabajando sus tierras y detonar proyectos de generación de ingresos para el bienestar de sus familias; y, por otra parte, las amenazas de despojo de sus territorios, cada vez más recurrentes, por parte de agentes externos que pretenden instaurar proyectos extractivos como la minería o desarrollos inmobiliarios.

Puntualiza que en las pasadas

dos décadas ha sido muy riesgoso “el acoso que gran parte de los ejidos y comunidades empiezan a recibir de actores externos, ya sea por presiones inmobiliarias, presión de grupos organizados, extractivos, llámese la minería u otros, que de alguna forma atentan contra los usos y costumbres de estas comunidades.”

Román Meyer explica que en la Sedatu “estamos completamente sensibilizados del hecho de que en las últimas tres o cuatro décadas, prácticamente desde inicios del salinismo, se ha visto al sector agrario como un obstáculo para el desarrollo, pero no compartimos ese pensamiento, no solamente aquí dentro de la secretaría, también el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, coincide en esta visión de que únicamente rescatando al campo y a los jóvenes del campo es que podemos mejorar las condiciones de desarrollo del país y disminuir las brechas de desigualdad y con ello gran parte los problemas de seguridad.”

Comenta que la dependencia a su cargo cuenta con los instrumentos tanto jurídicos como legales para llevar a cabo la tarea de evitar los procesos de despojo y desplazamiento de estos actores rurales. “Contamos con las atribuciones y el marco norma-

tivo actual funciona para hacer la defensa correspondiente de posibles procesos de despojo de los territorios de las comunidades. En muchos casos lo hacemos a través de una coordinación plena con la Procuraduría Agraria.”

Acerca de las molestias y señalamientos por parte de colectivos sociales y organizaciones de la sociedad civil en torno a los proyectos de infraestructura prioritarios para el gobierno federal,

por los abusos que se comenten contra las comunidades y ejidos, particularmente en el proyecto del Tren Maya y el Proyecto del Istmo, en los que dependencias como Fonatur presionan a los dueños de los territorios para que accedan a vender sus terrenos para avanzar en el desarrollo de estos proyectos, Meyer refiere que “como estos proyectos recaen en terrenos de carácter social, tenemos la obligación de estar de forma presente continuamente en las mesas de trabajo y en las comunidades haciendo trabajo de sensibilización del proyecto, con la exposición de cuáles son las ventajas y cuáles son los puntos que se tienen que poner en consideración, con la finalidad de nunca trasgredir los derechos de los ejidatarios y comuneros.”

Detalla que “para los proyectos del Istmo y del Tren Maya no hay una mesa de trabajo en la que no haya una representación de la Sedatu, en la medida de lo posible, tratando de adelantarnos a posibles conflictos, y avanzando en temas de negociación con las comunidades para que no vean a estos proyectos como un proceso más de despojo.”

Sin embargo, uno de los principales reclamos de las comunidades mayas en la Península de Yucatán y de las comunidades y colectivos de la región del Istmo es que estos proyectos no se elaboraron con su participación ni consentimiento, es decir, les están siendo impuestos desde la administración federal.

Esto, además, incurre en incumplimientos de tratados internacionales de los cuales México es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con

la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”

El Convenio señala que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

Esto no ha ocurrido con el Proyecto del Istmo ni con el Tren Maya; tampoco con los megaproyectos extractivos de minería e hidrocarburos que se instalan en los territorios.

Al respecto, Meyer plantea que para proteger las decisiones de los ejidatarios y comuneros la dependencia cuenta con visitadores agrarios de la Procuraduría Agraria, que dan el seguimiento a los acuerdos de asamblea. “Lo que tenemos que hacer es reforzar que estos visitadores sean instancias de seguimiento en la vida cotidiana de estas asambleas y así lograr la certificación de las decisiones tomadas en los núcleos agrarios, ya sea que decidan irse a dominio pleno, pues tienen las atribuciones de hacerlo si así lo deciden.”

Puntualiza que “nuestra obligación es que esas asambleas y los acuerdos tomados se lleven conforme a la voluntad de la mayoría de la gente y, en la medida de lo posible, detectar si hay una modificación en la conformación de la asamblea que no responda realmente a la voluntad de la mayoría de gente que conforma estas asambleas.”

Meyer Falcón considera que los ejidos y comunidades seguirán vivos por mucho tiempo más, pues a pesar de los muchos intentos que se han hecho por desarticularlos, siguen vigentes. “Ahí están los números, aún contamos con más de 32 mil núcleos agrarios, es el legado de casi un siglo que nos dejó el general Lázaro Cárdenas”.

Expone que “esas estructuras ejidales y comunales van a seguir bastante arraigadas y es un tema a favor del desarrollo del país, nosotros estamos a favor de que la estructura ejidal y las comunidades se mantengan y es una indicación del presidente que así sea.”



Ejidatarios y comunidades han sobrevivido a diversos intentos de desarticularlos, dice el secretario Román Meyer.

ENTREVISTA A EMILIO GARCÍA

# El sector turístico, el más voraz en el acaparamiento de tierras comunales: RAN

Cecilia Navarro

Como otras dependencias y oficinas del gobierno, el Registro Agrario Nacional enfrenta falta de personal por la "austeridad". A casi 8 meses de trabajo de la nueva administración, el coordinador del RAN, confía en que en un mes, "o dos", Hacienda dará la autorización para comenzar a contratar personal para las regiones rurales, donde el RAN tiene la tarea de regularizar y dar seguridad jurídica en la propiedad social de la tierra a ejidos y comunidades. En esta entrevista, Emilio García, responsable del RAN, habla de los desafíos de esa dependencia, a la luz de los megaproyectos, incluidos los del nuevo gobierno, y los procesos de despojo que pueblos y comunidades están enfrentando en todo el país.

"Nuestra primera encomienda es fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra de propiedad social. La segunda es el combate a la corrupción, sabemos que históricamente ha habido organismos como el RAN en las que ha estado ese cáncer. Lo estamos

combatiendo porque ha afectado al campo mexicano. También estamos reestructurando la dependencia. Estamos simplificando procesos y acatando la disposición presidencial de reducir al mínimo los recursos humanos. Esas son nuestras tres tareas principales", comenta García.

¿Con qué se están encontrando en materia de corrupción en el RAN?

Es impulsada por quienes están interesados en los grandes negocios con el suelo y por algunos políticos que se han hecho de grandes terrenos para hacer negocios. Estamos encontrando en diferentes estados la apropiación masiva de tierras de ejidos y comunidades a través de procedimientos aparentemente legales, de maniobras de gente que conoce el procedimiento y recurre a la compra de autoridades ejidales y comunidades y de ejidatarios en lo individual para llegar al dominio pleno de las parcelas, dejando al propietario social sin nada, a cambio de un dinero que se pronto se les acaba.

Algunos procedimientos son legales y otros son formas de despojo abierto. En su momento daremos a conocer la magnitud del problema y a los responsables del mismo. Tenemos que denunciarlos, pero aún no lo podemos hacer.

¿En dónde se están dando con mayor frecuencia estos casos?

En los destinos de playa, en Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Nayarit, donde el suelo alcanza muy altos costos por la industria turística. Estamos revisando con cuidado las solicitudes dominio pleno. Y si encontramos que hay alguna situación rara, como alguna parcela que excede de manera impresionante el tamaño promedio, ahí revisamos qué sucede.

Además, estamos estableciendo criterios, para que cuando haya irregularidades podamos detener el proceso y pedir una investigación.

Los primeros casos los daremos a conocer una vez que tengamos establecidas las representaciones formales en los estados, quizá

Desde 1992, con la reforma al artículo 27, se ha reducido considerablemente la propiedad social; en 1992 era alrededor de 60%. Y hoy andamos en 50% o menos. Hay estados como Guerrero y Oaxaca donde más del 70% de la tierra es propiedad social. Ahí vamos a cuidar que no se siga afectando de manera ilegal esa propiedad social.



Zona hotelera de Cancún.



"Nuestra encomienda es fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra de propiedad social": Emilio García del RAN.

Los más afectados son los que tienen presencia de industria turística y el Estado de México, por la presión de la mancha urbana, de los grandes fraccionadores y desarrolladores que operan en diversos municipios, en las zonas que están en procesos de urbanización.

en uno o dos meses. Eso nos va a permitir de manera formal dar a conocer la situación.

¿Ya tienen un diagnóstico actualizado sobre los conflictos territoriales activos? ¿Cuál es la situación?

Estamos construyendo este diagnóstico. Pero hemos detectado cientos de conflictos graves, focos rojos, que están en riesgo de llegar a violencia. Algunos son intercomunitarios, otros de linderos. En Guerrero hay por lo menos 50 conflictos; en Oaxaca y Chiapas, más. Hay focos rojos de la magnitud de la Selva Lacandona, de la zona mixteca. Del diagnóstico vamos a desprender el plan del trabajo para este y varios años más. Estará en un par de meses.

¿Qué están haciendo para solventar estos problemas?

Estamos yendo a hacer levantamientos topográficos para definir linderos, lo estamos haciendo en Campeche, Yucatán y otros estados. Y estamos en las mesas agrarias en las que convergen diversas dependencias y autoridades que ven temas agrarios. Ya hay mesas en Campeche, Tabasco, Yucatán, Guerrero, entre otros.

¿Tienen alguna política o esquema para evitar el hostigamiento que los ejidos están enfrentando para ceder sus tierras? Por ejemplo, en Península son presionados por los empleados de Fonatur y la CFE, por servidores públicos que trabajan para las empresas, por

falsos ejidatarios. Son presionados por quienes buscan construir gasoductos, parques eólicos, desarrollos inmobiliarios, entre otros.

En primer lugar, es importante que la gente esté informada del carácter de los proyectos, de la importancia de mantener la propiedad social de la tierra. Esta estrategia tiene que conjuntarse con el trabajo de otras dependencias, como Agricultura y Bienestar. Estamos buscando coordinarnos con ellos para que los dueños de las tierras puedan desarrollar proyectos productivos en sus tierras. El RAN no cuenta con recursos para proyectos productivos, pero sí esas otras dependencias.

Se sabe, por ejemplo, que en Bacalar los empleados de Fonatur están presionando al ejido para que ceda 5 mil hectáreas...

Nosotros informamos lo que puede significar la venta desventajosa de tierras. Ya tuvimos contacto con los ejidatarios de Bacalar, estamos buscando que no malbaraten sus tierras, que las aprovechen de manera organizada. Ya hay avances en eso.

No solo sucede en Bacalar, sino en otras zonas, donde se puede rescatar el ejido común unidad productiva, como empresa social, cooperativa. No es tanto esa nuestra tarea aunque sí podemos participar. Nuestra tarea es cuidar la propiedad social de las tierras.

VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>

# Alimentar a México sin deforestar

José Sarukhán Kermez

La forma como alimentemos a la población de México hacia la mitad de este siglo será determinante para definir qué proporción de nuestros ecosistemas terrestres y marinos podrán conservarse. La producción de alimentos ha sido la causa central de la transformación de los ecosistemas naturales en el planeta a lo largo de la historia de la humanidad, tanto por el creciente número de bocas que ha habido que alimentar con el crecimiento poblacional de la humanidad, como por el tipo de dietas adoptadas por las diferentes sociedades a lo largo de la historia, especialmente en el pasado siglo. Los costos ambientales y energéticos de gran parte de las dietas modernas basadas en alimentos industrializados son tan altos que se calcula que mantener la tendencia de éstas a nivel global para alimentar la población de mediados del siglo, anularía las reducciones de emisiones de gases con efecto de invernadero logradas por la industria mundial para esas fechas.

Un elemento más que se suma a las amenazas de la dependencia de las grandes industrias agroalimentarias es el hecho de que unas seis compañías controlan más del 60% de los granos utilizados para sembrar en el mundo.

México, además de ser un país megadiverso y multicultural, es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas alimenticias y ha sido centro independiente de origen de la agricultura. En nuestro país, la enorme diversidad cultural,

producto de la rica diversidad biológica, tiene una estrecha relación con la agricultura y, en consecuencia, con la salud humana. Los elementos anteriores nos permiten producir alimentos de forma soberana, es decir con total libertad e independencia acerca de qué cultivos sembramos, dónde los cultivamos de acuerdo con sus requerimientos ecológicos y qué semillas utilizamos para ello, sin depender de los grandes productores agroindustriales.

El reporte global que la FAO produce anualmente estableció en 2014 que la principal fuente, por mucho, de producción de alimentos en el mundo es la agricultura familiar o campesina, llevada a cabo en pequeñas extensiones de 2 o menos hectáreas, y no la agricultura industrial de grandes extensiones y de alta tecnificación; establece ese reporte también que hay que fortalecer esa agricultura familiar con medidas varias.

Es indispensable que las políticas públicas que puedan afectar al ambiente o que estén dirigidas a la producción de alimentos estén basadas en información científica de la mejor calidad posible, con resultados confiables, que no estén influidos por caprichos del momento o por intereses económicos o ideológicos personales o de grupo. En las últimas tres o cuatro décadas nuestro país ha experimentado muchos avances y cambios positivos en este sentido. Tenemos ahora mejores conocimientos para diseñar mejores políticas públicas y al mismo tiempo hay más entendimiento y partici-



Los costos ambientales y energéticos de las dietas modernas basadas en alimentos industrializados son muy altos, dice el dr. José Sarukhán. Carlos Ramos Mamahua

pación social que deriva en acciones colectivas informadas, fuertes y activas, que puede cambiar para bien el desarrollo de políticas públicas, haciendo que sean más atinadas y que eviten o minimicen las tendencias de agotamiento de nuestros recursos naturales. Cuando contamos en México con datos confiables y por otro lado contamos con la capacidad institucional y personal para generar la información que requerimos, es inaceptable que las políticas públicas se sigan llevando a cabo de manera aislada de ese conocimiento. Todo indica que, en la nueva visión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se apoyará a los pequeños productores y las comunidades indígenas y rurales y con ello se podrá valorar la enorme agrobiodiversidad que han conservado y que posibilita la producción soberana de alimentos.

A lo largo de un cuarto de siglo, México ha generado en Conabio, como ningún otro país, la mayor cantidad de información sobre su biodiversidad, bajo un solo techo institucional y de manera accesible a toda la sociedad. Un ejemplo, único en el mundo, del uso de esta información para la aplicación de políticas públicas

México, además de ser un país megadiverso y multicultural, es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas alimenticias y ha sido centro independiente de origen de la agricultura. Esto nos permite producir alimentos de forma soberana, con total libertad e independencia acerca de qué cultivos sembramos, dónde y qué semillas utilizamos para ello, sin depender de los grandes productores agroindustriales.

ha establecido en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con ella, la Sader debe considerar la información sobre la vegetación que cubre el suelo para otorgar los muy variados subsidios a la agricultura y no se podrán modificar o destruir ecosistemas naturales ni predios forestales de importancia para su conservación para producir alimentos. Para ello se cuenta con un mapa de gran detalle y un sistema que consulta la información espacial que puede responder en unos segundos si es dable, o no, otorgar el subsidio solicitado por los agricultores.

Sin embargo, es indispensable también que la sociedad mexicana modifique sus comportamientos de consumo. Particularmente, la población urbana debe hacer conciencia del impacto que genera sobre el medio ambiente lo que come y consume. La población urbana, como un intenso consumidor de energía, alimentos y bienes, tiene un gran poder para cambiar las cosas, justamente por su poder como consumidores. No hay gobierno que haga algo dife-

rente si la población no cambia por convicción, por congruencia ética con lo que está viendo que ocurre por su actividad como consumidor. Ahora tenemos mayor cantidad de información que la que tuvieron generaciones pasadas; sabemos qué pasa con cada tonelada de CO<sub>2</sub> que se emite, hay más satélites que nos proveen de datos, se conocen con más detalle los daños que se generan con la pérdida de biodiversidad, cómo van desapareciendo las poblaciones y cómo se extingue una especie cuando su última población desaparece.

Tenemos que cambiar profundamente nuestro comportamiento y consumo personal, influir en lo que ocurre en nuestra familia, nuestro barrio o la ciudad en que vivimos. La única manera de exigirle a los gobiernos locales, estatales o nacionales que tomen las acciones apropiadas, es con el ejemplo que mostramos en nuestro comportamiento. La vida en el planeta no desaparecerá, pero sí puede hacerlo nuestra civilización como la conocemos, la del *Homo sapiens*. •

Tenemos que cambiar profundamente nuestro comportamiento y consumo personal, influir en lo que ocurre en nuestra familia, nuestro barrio o la ciudad en que vivimos. La única manera de exigirle a los gobiernos locales, estatales o nacionales que tomen las acciones apropiadas, es con el ejemplo que mostramos en nuestro comportamiento. La vida en el planeta no desaparecerá, pero sí puede hacerlo nuestra civilización como la conocemos, la del *Homo sapiens*.



“Nos anima que se perfile en México una política plural, lejana a la idea del pensamiento único”, dice la dra. Elena Álvarez. Roberto García Ortiz

CONVERSACIÓN CON ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA

# Igualdad sustantiva y saberes y comunalidad indígenas

Julio Moguel

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez-Buylla, pone los acentos donde deben ponerse y se enfrenta sin problema alguno a dos temas que le planteamos en una conversación reciente. El primero remite al rubro de la equidad de género o la igualdad sustantiva, concepto y temática que ha sido abordado sin lugar a dudas desde el gobierno con cierta pertinencia, pero no, en mi opinión, con la contundencia y claridad que se requiere. El segundo se ubica en la forma en que deba o pueda tratarse, también en concepto y en el aterrizaje político, la temática de la “ciencia y la tecnología” de cara a los “saberes originarios” o a los saberes y patrimonios indígenas. Platicamos con ella en torno a ambos aspectos, aprovechando la oportunidad para ampliar la conversación en algún otro punto.

¿Cuál es el balance y los proyectos que en el tema de género y de políticas de igualdad sustantiva se plantea el Conacyt?

En ese tema nos hemos encontrado con algunas desagradables sorpresas. Se tiene, por ejemplo,

un programa de estancias posdoctorales para mujeres indígenas, lo que sin duda es relevante. Pero resulta que sólo 6 mujeres indígenas participaban en el programa.

Por otro lado, nos encontramos con que la brecha entre hombres y mujeres en la estructura heredada del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es significativamente negativa. Resulta que el SNI tiene, en sus primeros niveles (es decir, en el nivel de candidato, o en el nivel número 1) una relación en la que el 50% son mujeres y el 50% son hombres; pero cuando se llega al nivel 3, que está constituido por 2493 miembros, sumado a ello los Eméritos, resulta que menos del 20% son mujeres.

Hay que reducir esta brecha de manera sustancial. Las mujeres y los hombres tenemos aportaciones complementarias que hay que valorar. Esta brecha de género no remite sólo a una exigencia básica de equidad, sino que redundante en serios problemas en cuanto a cómo se piensa, y cómo se enseña la ciencia.

Nuestro programa de becas se desarrolla con una política de inclusión que apunta hacia un es-

quema de igualdad sustantiva. Y que pretende dar cobertura, además, a aquellas personas que por una razón u otra se encuentran en condiciones de desventaja estructural en la materia.

*Has hablado en varios momentos de los saberes indígenas y de las comunidades campesinas; y has dado significativa relevancia en tus respuestas al tema de las relaciones comunitarias y el trabajo en comunidad. Se implica en lo que dices la idea de la pluralidad o pluriculturalidad; y el de concepciones que vienen desde los mundos rurales y que enriquecen el desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología. ¿Podrías abundar sobre ello?*

En el mundo indígena se encuentra un conocimiento de compro-

miso, de pertenencia con el otro, con la naturaleza, donde uno de los valores que más aprecian es el valor de compartir: cuando vas a las comunidades siempre te dan algo, aunque sea poquito; de eso escogen lo mejor y te lo brindan.

Desde esos espacios comunitarios se desarrollan procesos cognitivos con bases epistemológicas que, aunque no se formalicen, tienen una significativa profundidad y son –o deberían ser– útiles para el desarrollo global del país. “Hacer milpa”, por ejemplo, analizado por Armando Bartra, no se refiere a un policultivo adecuado para aprovechar al máximo los recursos escasos que el campesino tiene a la mano. El tema no implica fundamentalmente que con ello se potencien productividades y ganancias, sino el

En el mundo indígena se encuentra un conocimiento de compromiso, de pertenencia con el otro, con la naturaleza, donde uno de los valores que más aprecian es el valor de compartir: cuando vas a las comunidades siempre te dan algo, aunque sea poquito; de eso escogen lo mejor y te lo brindan.

desarrollo de un sistema agroecológico que presupone el sentido de comunalidad y de respeto y cuidado a la naturaleza. Pero es también un sistema productivo que provee una dieta saludable, con alimentos no sólo sanos sino culturalmente pertinentes. “Hacer milpa” implica un contacto con la naturaleza mucho más complejo, holístico, continuo, respetuoso. Es producto de esa sabiduría milenaria que sigue muy viva en el país.

Queda por discutir cómo favorecer y desarrollar bien esos conocimientos ancestrales. Cuidar, por ejemplo, que al dar a conocer o difundir esos saberes no estemos ayudando a los procesos en curso de despojo. Habría que desarrollar una red de repositorios de saberes, pero también de mecanismos de regulación que reconozcan esta riqueza; y cuidar de no meter esa economía a lógicas de privatización. El tema es extremadamente complejo, pues surge naturalmente la pregunta: ¿cómo proteger ese conocimiento? ¿Van a ser bienes nacionales o bienes autónomos? No tengo respuestas frente a ello. En cualquiera de los casos, es decisivo que lo que se defina no ponga en peligro el quehacer autónomo y el nivel de bienestar de las comunidades campesinas, ni la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Creo muy importante desarrollar una política generacional de integración sin que se pierda la diversidad; y sin que se pierdan esas múltiples voces y perspectivas de los pueblos originarios de México. Y mantener un cuidado especial en que se proteja la integridad de sus territorios, que no son sólo territorios geográficos, sino territorios bioculturales muy complejos. Es por todo ello que estamos comprometidos con la formación de una dirección de ciencia comunitaria.

Como he dicho en otro momento, nos anima que se perfile en México una política plural, lejana a la idea del pensamiento único. Porque, lo que en realidad tenemos en México no es “una” ciencia o “una” técnica. En mi caminar por territorios indígenas y campesinos, en el desarrollo de mis investigaciones, he encontrado la profundidad del carácter sistémico, místico y generoso del quehacer científico, cognitivo, epistemológico y filosófico de las comunidades tradicionales; tienen éstas una gran riqueza de saberes que no ha sido bien direccionada en favor del país y del mundo. Queremos vincular en forma estrecha las ciencias y las técnicas con el conocimiento humanístico y social, dejando atrás ideas tecnocráticas y de un pragmatismo excesivo.

VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>

# La agricultura sustentable, al rescate del campo y de la productividad

## Redacción

**Experiencias en el centro y norte de Sinaloa evidencian efectos rápidos en mayor rendimiento de toneladas por hectárea y recuperación de la salud del suelo. Productores de granos son los protagonistas y apasionados promotores de tecnologías amigables con el medio ambiente; los efectos: en el ingreso rural, en la preservación y cuidado de los recursos suelo y agua y en una oferta alimentaria saludable en la mesa de los consumidores.**

En el marco de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y particularmente la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, tiene el reto y la tarea de impulsar la autosuficiencia alimentaria. Uno de los programas estratégicos, Producción para el Bienestar —que sustituyó con sustanciales modificaciones a Proagro/Procampo— otorga apoyos directos a productores de granos de escala pequeña y mediana, los cuales se entregan, por primera vez, de manera anticipada a las siembras. El programa tiene otras líneas de acción que son novedosas, como son los apoyos a 250 mil productores de maíz, frijol y milpa de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación, y a cafetaleros y cañeros. Una vertiente adicional estriba en el acompañamiento técnico, que asume como elemento prioritario el impulso a la innovación tecnológica, con orientación particular hacia la agricultura sustentable. La gran apuesta es elevar la producción y oferta alimentaria con prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente. Este texto muestra parte de las experiencias exitosas en esta materia visitadas por la Subsecretaría, y que son parte ya del bagaje que habrá de divulgarse a lo largo de la República.

Una revolución tecnológica está en marcha en el campo mexi-

cano. Es un movimiento transformador hacia la agricultura sustentable, y aunque pareciera impensable a primera vista, Sinaloa, estado caracterizado por su producción intensiva usuaria de agroquímicos, participa en ella.

Productores graneros de pequeña y mediana escala del centro de la entidad experimentan en sus tierras un aumento significativo e inmediato, de un año a otro, en sus rendimientos por hectárea, y lo más importante, dicen ellos, observan un recuperación en la salud de sus suelos y obtienen cosechas que pueden consumir ellos, sus familias



Mario Urías.

y sus compradores con toda la confianza de que son saludables, libres de tóxicos.

En la región de El Tamarindo, del Valle de Culiacán, Miguel Arturo Gastélum y Francisco Román León producen maíz. Ambos decidieron dejar de lado los agroquímicos y adoptar una serie de prácticas que son parte del Manejo Integrado de Cultivos Inducidos (MICI), guiados por el científico Juan José Valdespino, promotor de este esquema.

Elementos clave de su labor son una serie de aparatos y tecnologías para diagnosticar la condición general de suelos y plantas, y otros para medir la salud o degradación y toxicidad de los suelos: el medidor de compactación de suelos (conocido por los productores como penetrómetro), el potenciómetro (conocido coloquialmente como peachímetro, que mide acidez/alcalinidad), el conductómetro (para ver la conductividad eléctrica) y uno más para registrar el potencial de óxido reducción. En el Valle de Culiacán los productores acceden a estos aparatos por medio de una paraфинanciera propiedad de agricultores, denominada Impulso Rural.

Miguel comenta que empezó con sus procesos de agricultura sustentable hace dos años y medio, teniendo un problema serio: “este suelo era prácticamente duro, una piedra”. Con los preceptos de MICI, aplicó ácidos y microbiología a su suelo para descompactarlo y equilibrar su PH y elevó sus rendimientos de siete a 13 toneladas por hectárea en el primer año. Ha dejado de usar el herbicida glifosato y utiliza un poco de fumigante químico aunque pronto dejará de usarlo. En estos tres años ha incorporado otros elementos del MICI, como es la microbiología, el control biológico de plagas y



Francisco Román.

el uso de aparatos y tecnologías mencionados arriba.

Además, las fases de la luna le brindan señales precisas de cómo realizar la nutrición de suelo y planta. “Cuando la luna está aguas arriba, dice, la planta succiona todos los nutrientes de la raíz hacia su interior y todo aquel fertilizante o microbiología debe aplicarse en el riego, y cuando la luna está aguas abajo, la sabia circula de arriba hacia abajo y los nutrientes entran aplicados foliarmente hacia la raíz”.

El productor señala que los efectos de las prácticas sustentables se ven inmediatamente. “Hoy mis plantas tienen una altura de casi tres metros; cuando este suelo tenía problemas alcanzaban apenas unos dos metros, el maíz quedaba pequeño. Yo le

echaba el mejor fertilizante que había en el mercado, y ni así; el problema no era el fertilizante, era el suelo. El brinco que di en rendimientos fue lo que me convenció más que nada.

“La microbiología me ayuda mucho en el control de plagas; si he tenido, pero mucho menos. Creo que el año que viene ya no fumigaré. Les digo a los compañeros que se animen a aplicar este sistema. Es algo bien sencillo. Al principio, de ver tanta cosa, yo decía ‘¿cómo le voy a hacer?’ Solo se va dando, es cuestión de capacitación. Todos los insumos los consigo en Culiacán e imagino que en otros lugares es igual. O está la opción de producir uno mismo la microbiología; no es complicado instalar una biofábrica”.

VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>

## ¿De dónde surgió el MICI?

El MICI es complemento del modelo Agricultura Campesina de Conocimientos Integrados (ACCI), que ha venido conformándose y enriqueciéndose desde hace unos diez años a partir de la experiencia de organizaciones de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) presentes en Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, entre otras. El modelo ACCI-MICI

combina el conocimiento y la observación de los productores con el análisis de científicos y especialistas en campo y laboratorio; parte del conocimiento de los procesos de crecimiento de las plantas en interacción con el suelo y el medio ambiente y echa mano de herramientas científicas (química, física, biología y nutrición mineral) para intervenir en esos procesos.

Parte de esta información puede verse en:

[www.youtube.com/watch?v=BLiWinEu4r4](http://www.youtube.com/watch?v=BLiWinEu4r4),

[www.youtube.com/watch?v=3gG7eXRGxvY&t=42s](http://www.youtube.com/watch?v=3gG7eXRGxvY&t=42s),

[www.youtube.com/watch?v=PFY-3gzZBks](http://www.youtube.com/watch?v=PFY-3gzZBks)

Para obtener mayor información de la labor de Sader en este tema, llame al 3871 1000 ext. 33643 o envíe un mensaje a: [hector.robles@sader.gob.mx](mailto:hector.robles@sader.gob.mx)

# Al bienestar por la ruta de la milpa

Pablo A. Fregoso Rojas Proasus-Cesoi

Cuando nos acercamos en 2009 a la utilización de la milpa como el vehículo para atender los desequilibrios en el intercambio desigual de familias cafetaleras con los intermediarios que pagaban el café de los pequeños productores con maíz del que los productores eran deficitarios, no nos imaginábamos el potencial que este sistema productivo tendría como eje para articular un conjunto de intervenciones que combinan dos elementos cruciales para enfrentar la realidad actual: promover una agricultura climáticamente inteligente para la construcción del bienestar familiar en un sentido amplio.

Hace un año, hicimos una síntesis de los logros del trabajo desarrollado por Proasus (Promotores del Autodesarrollo Sustentable de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V.) en la promoción y establecimiento de un conjunto de experiencias llevadas a cabo en diversos municipios del estado de Chiapas a lo largo de casi diez años utilizando el sistema denominado Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF), que en el camino ha incorporado la sostenibilidad ambiental y las prácticas amigables con la biodiversidad, con lo que se trans-

formó en una iniciativa de mayor alcance al añadirle el aspecto de la diversificación, al grado que ahora sea posible denominarla Milpa Intercalada con Árboles Frutales Diversificada (MIAF-D).

Promover este sistema productivo ha tenido efectos en la productividad y en la diversificación de las parcelas, que significan mayor capacidad de los productores para fortalecer su seguridad alimentaria y obtener ingresos adicionales, además de otros resultados asociados a la sostenibilidad ambiental como la retención de suelo y la humedad, efectos que no se han podido cuantificar adecuadamente.

Para que tales transformaciones puedan darse, un elemento clave es la forma de establecer la relación de trabajo con las familias que participan; se trata de construir una relación desde la confianza, en el trato, en las capacidades, en donde la participación de las mujeres es clave.

El acercamiento más significativo a las familias ha provenido de partir del establecimiento de pequeños módulos para la producción de hongos seta, en donde destaca el hecho de que es un producto altamente consumido



Parcela diversificada. CONABIO, Aldama, Chiapas

por las familias atendidas, que exige relativamente de pocos activos y de no mucho trabajo adicional, que produce en un tiempo muy corto, además de que los excedentes encuentran en el mercado local la posibilidad de venderse y generar ingresos adicionales para las mujeres. La obtención de resultados rápidos y tangibles, genera en las familias la certeza de que es posible avanzar en la mejoría de su condición de vida, lo que ha sido determinante para que otras familias se sumen al proyecto.

Asimismo, ha sido la base para desarrollar un proyecto de mayor trascendencia: las parcelas de Milpa Intercalada con Árboles Frutales Diversificada (MIAF-D), en donde la participación familiar se ha ampliado.

Ambas actividades han requerido de trabajar en la mejora de las capacidades productivas de las familias. En el caso de la pro-

ducción de hongo, si bien no es un proceso técnicamente complejo, ha supuesto un proceso de formación que va desde la construcción del espacio en donde se cultiva el hongo, pasando por la elaboración del sustrato donde se inocula la semilla y las prácticas de cuidado y cosecha. Esta práctica se desarrolla sobre un sustrato constituido por esquilmos agrícolas, subproductos que ahora son apreciados, pues los tienen que almacenar luego de la cosecha del maíz y el frijol, para sostener la producción a lo largo del año, además de que se ha evitado la práctica de la quema.

El establecimiento del MIAF-D ha sido más complejo, pues requiere de la adopción de algunas prácticas que cuestionan las formas de producción cotidianas de los pequeños agricultores, pero que se han ido introduciendo con respeto a los tiempos y las formas de aprendizaje campesino, que se asientan principalmente en la práctica y la

evidencia empírica. Hemos podido ver cómo el cambio en la densidad de siembra del maíz, por ejemplo, se ha tenido que acreditar mediante el establecimiento de parcelas paralelas en las que una se siembra con la forma tradicional y otra con las nuevas técnicas. La demostración se traduce en la inmediata adopción del nuevo sistema.

La incorporación de prácticas como la retención de suelo y agua que se traduce en mejores rendimientos y mayor diversidad de especies en la parcela que significa una inmediata mejora alimenticia, también se ha hecho una práctica. La incorporación de pequeñas ollas de agua que permiten regar las y aumentar su producción es otra práctica que empieza a adoptarse.

Cada vez se dispone de mayor evidencia de que se han mejorado las unidades productivas de las familias participantes, permitiendo la generación de alimentos en diferentes épocas, así como de algunos excedentes para el mercado de corto recorrido. Disponer de pequeñas obras de riego ha permitido la producción diversificada de hortalizas, incluso durante la época de estiaje.

También se está produciendo una transformación del paisaje caracterizado por una mayor diversidad de plantas mediante la conservación in situ de semillas, plantas y material genético que forma parte de la biodiversidad mexicana y patrimonio cultural de las comunidades rurales. Ahora se pueden acreditar servicios ambientales en alrededor de 25 hectáreas que cultivan las 70 familias que forman parte de esta experiencia (las parcelas tienen una extensión promedio de media hectárea) y que constituyen ya una referencia para otras familias interesadas en mejorar su calidad de vida a través de la adopción de este sistema productivo.



Generación de alimentos. PROASUS, Aldama, Chiapas

VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>

# Bosques para la gente: recuperar la política forestal

Francisco Chapela Asesor Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C.

La Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define que el “Desarrollo Forestal Sustentable” debe ser la política para las zonas forestales de México. Por Ley, el gobierno debe promover un “Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector.” (Art. 7- XXI).

Pero en los hechos se aplica una política *de facto* que privilegia la explotación de las zonas de mejores yacimientos de madera o “macizos forestales” y desatiende el resto, argumentando razones de conservación que no son reales.

La “productividad óptima y sostenida” no se está logrando: los bosques bajo manejo formal son menos. La producción legal de madera disminuye. Los incendios y la deforestación siguen imparables.

Un grupo de 6 organizaciones de productores, 5 organizaciones de la sociedad civil y una universidad, convocaron a 91 participantes de diversas organizaciones al

taller nacional “Bosques para el Buen Vivir”, realizado en la comunidad zapoteca de Capulapam de Méndez el 26 y 27 de octubre de 2018. Ahí se identificaron los problemas y obstáculos que enfrenta el sector social forestal y se elaboró una agenda de acciones para revertir la situación de deterioro de los bosques y de las condiciones de vida de la gente. Reportamos aquí la problemática identificada en el taller. La agenda de acción será motivo de otro documento.

Se identificaron 4 retos fundamentales:

## 1 Superar el énfasis en los macizos forestales y el enfoque extractivista

La política *de facto* ha privilegiado el aprovechamiento para las industrias de la celulosa y papel, construcción, mueblera y para materiales de empaque. Ese énfasis desalienta el manejo forestal sostenible en otros lugares, y hace que el uso del suelo hacia actividades no forestales se vuelva más atractivo, reduciendo las oportunidades de desarrollo económico basado en el bosque en la mayor parte de México. La concentración es tal, que en solamente Durango, Chihuahua y Veracruz se obtiene el 56% del producto nacional (tabla 1).

El candidato Peña Nieto se comprometió “por escrito” a duplicar la producción de madera durante su sexenio. Pero, según la Semarnat, inició con 5.9 millones de metros cúbicos y en 2016 iba solamente en 6.7.

No ha sido posible “alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas”.

## 2 Lograr acceso a un financiamiento adecuado

La política *de facto* ha distorsionado a las instituciones financieras. En el sector forestal, tal parece que los productores no desean contraer crédito y los bancos no quieren prestar. Ante la falta de esquemas de previsión, como pudieran ser los fondos de inversión y el aseguramiento, para las comunidades forestales el riesgo y las implicaciones del no pago son enormes. Por ejemplo, un deslizamiento de tierras impedirá el acceso a las zonas de cosecha y la venta de madera por semanas. Reparar el camino puede costar millones de pesos. Para los bancos, las comunidades forestales no son buenos sujetos de crédito, pues no tienen garantías suficientes que ofrecer. Si bien esas comunidades cuentan normalmente con un capital natural importante (la madera en pie), ningún banco ha aceptado eso como garantía para un crédito.

En lugar de fomentar los esquemas formales de ahorro y préstamo y productos financieros adecuados, el gobierno canalizó miles de millones de pesos en subsidios a cadenas productivas que no producen, reforestaciones que no prosperan y pago por servicios ambientales que no se prestan.

## 3 Desarrollar un nuevo concepto de empresa forestal

Las organizaciones de productores y las organizaciones sociales rurales en México y América Latina tienden a ubicarse en los extremos, cuando se trata de definir una postura respecto al papel de las empresas sociales forestales (ESF). Algunos consideran que pensar en una empresa forestal equivale a mercantilizar a la naturaleza y al patrimonio de la comunidad, y ponerlo a merced de las fuerzas del capitalismo salvaje. Para otros, las ESF son la mejor fuente de negocios e ingresos de la comunidad, pero dicen que deben ser capitalistas despiadadas, maximizar sus ga-

Tabla 1: Producción forestal maderable nacional 2016 (m<sup>3</sup>) por Estado

Estado	Total	Estado	Total	Estado	Total
Durango	2,356,922	Hidalgo	125,912	Querétaro	7,768
Chihuahua	884,457	Tamaulipas	79,540	Colima	7,622
Veracruz	522,506	Sinaloa	56,937	Nuevo León	5,904
Michoacán	447,478	Tabasco	56,276	Aguascalientes	5,819
Oaxaca	393,685	Quintana Roo	51,947	San Luis Potosí	3,921
Jalisco	342,254	Campeche	48,270	Morelos	3,729
México	296,067	Tlaxcala	45,426	Baja California S	2,835
Puebla	291,738	Guanajuato	38,331	Baja California	0
Sonora	200,763	Zacatecas	31,786	Coahuila	0
Guerrero	191,907	Nayarit	23,053	Distrito Federal	0
Chiapas	183,426	Yucatán	9,005		

Fuente: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Semarnat Anuario estadístico forestal 2016

nancias y generar riqueza, con la esperanza de que una vez obtenidas las ganancias, fluirán con el tiempo por la economía local y habrá bienestar social, medido en términos de ingresos *per cápita*.

Entre los dos extremos, falta una visión clara del propósito de las ESF y qué requieren para florecer y multiplicarse. Mientras tanto, las ESF están estancadas y en algunos casos desvaneciéndose.

## 4 Desarrollar nuevos mercados

El enfoque centrado en pocos macizos forestales, la falta de productos y sistemas financieros adecuados a los niveles de riesgo de las ESF y la poca claridad de las propias ESF sobre su papel en el desarrollo de la comunidad, les ha impedido desplegar creatividad e iniciativa en el desarrollo de los mercados. Aparte de los mercados convencionales, en los que las comunidades forestales tienen poca participación y control, se han atendido poco otras áreas de mercado que tienen demanda importante, como son la de mueble popular (DIY), sistemas de vivienda mediante auto-construcción, o la de materias primas para precursores químicos, entre otras.

Al no generar beneficios sociales y no contribuir tangiblemente a mejorar el nivel de vida, se pierden y degradan los bosques en México. Es un círculo vicioso de empobrecimiento ecológico y social.

Los retos mencionados son ingredientes de un síndrome de desinterés de la población local por el cuidado de los bosques. Hay una percepción creciente de que el manejo y protección forestales son asunto de técnicos e instituciones especializadas, lo cual provoca que en las loca-

lidades forestales la gente pierda interés en el cuidado de los bosques. Mientras el gobierno concentra más atribuciones, se inhiben las iniciativas locales de cultivo del bosque. Con esta lógica, la deforestación se concentra fuera de los macizos y se da en el sur-sureste. Al paso que vamos, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Tabasco podrían perder prácticamente toda su cubierta arbolada en los próximos 50 años, según datos del Observatorio Forestal Mundial (GFW, tabla 2).

El reporte de incendios de la Conafor indica que el 50% se dieron fuera de los macizos y curiosamente en donde hay más oportunidades de organización social: Estado de México, Michoacán, CDMX, Jalisco y Chiapas concentran más de la mitad de los 6,506 incendios reportados al 13 de junio de 2019. En Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Durango, y Jalisco, se afectaron 248,300 hectáreas (51% del total nacional). En Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán, se quemaron 15,957 hectáreas de arbolado adulto y renuevo, 56% del total nacional.

Durante el sexenio de Peña Nieto se debió avanzar en detener la deforestación, para llegar a 0% en el año 2025. Eso se ve difícil de alcanzar. Mientras que en el año 2000 la pérdida era de 158,000 hectáreas según el GFW, a fines del sexenio había SUBIDO a 299,000 hectáreas.

En el aspecto social, desatender el desarrollo de formas de aprovechamiento sostenible en la mayor parte de las áreas forestales del país, ha dado como resultado un estancamiento en las metas de desarrollo social en las zonas forestales, que ha ido de la mano de una degradación y pérdida de las áreas arboladas.

Tabla 2. % de pérdida de cubierta forestal 2001-2017 por entidad federativa

Estado	% pérdida	Estado	% pérdida	Estado	% pérdida
Yucatán	2.14	Tamaulipas	0.28	Sinaloa	0.08
Campeche	2.07	Michoacán	0.26	Colima	0.07
Quintana Roo	2.05	Guerrero	0.24	Durango	0.07
Chiapas	1.66	B. California	0.23	Morelos	0.07
Veracruz	1.59	Tlaxcala	0.22	CDMX	0.04
Tabasco	1.54	Nayarit	0.14	Guanajuato	0.04
Hidalgo	0.93	Coahuila	0.13	Sonora	0.02
Oaxaca	0.80	Chihuahua	0.11	B. California S.	0.01
S.L.P.	0.63	Querétaro	0.10	Zacatecas	0.01
Puebla	0.61	Jalisco	0.10	Aguascalientes	0.01
Nuevo León	0.30	México	0.09		

Fuente: Global Forest Watch, [www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX](http://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX).

HABLA FERNANDO CELIS CALLEJAS

# Incertidumbre y molestia: la voz de los cafetaleros

El padrón de productores de café en México sigue creciendo. Hace más de una década, el último padrón con geoposicionamiento satelital que levanto ASERCA llegó a 511 mil productores y 680 mil hectáreas con café. En años recientes se siguen dividiendo los terrenos con café; más mujeres tienen pequeños predios con café y, desde el 2016, con los apoyos fiscales para la renovación de cafetales debido a las afectaciones por la roya, se permitieron las solicitudes solo con una constancia de posesión de terrenos con café expedida por las autoridades locales. Actualmente con el anuncio de que los apoyos de 5 mil pesos serán por productor, se anotan más personas con predios pequeños con café. Por otra parte, están los anuncios de la siembra de café en 200 mil hectáreas en el sexenio del programa "Sembrando vida". Hay una tendencia de mayor minifundismo, con más indígenas y mujeres como productores de café. ¿Cuántos productores de café habrá al final del sexenio?



Fernando Celis. UCIPI

Con la formación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOCA) en 1989 y en alianza con grupos cafetaleros de otras organizaciones campesinas que se llamaban independientes, a partir de 1993 se rompió el esquema de representación corporativa de los cafetaleros ligado a los gobiernos priistas.

Con la participación solo de organizaciones cafetaleras se inició una coordinación gremial y plural para la gestión conjunta de las políticas cafetaleras y la instrumentación de los programas de apoyo. Esta acción conjunta se dio hasta el 2011 y se ha retomado en el 2018 con una coordinación entre el Sistema Producto Café Nacional y Sistemas Estatales en que participan muchas organizaciones regionales y locales que no son miembros de organizaciones nacionales: la Conaprocafé, en la que participan grupos cafetaleros ligados a la UNORCA; UGOCEP, El Barzón y otros, la CNOCA y la Unión de Productores de Café de la CNC. Nuevamente, de manera conjunta se presentan planteamientos de políticas cafetaleras y programas.

Con la crisis de bajos precios de 1989 a 1994 quebraron la mayoría de las organizaciones que comercializaban e incluso exportaban café convencional. En la CNOCA varias organizaciones se orientaron a producir café orgánico y ventas en el llamado

Comercio Justo y son los que han logrado sostenerse como exportadores. En años recientes se ha ido adquiriendo más experiencia en la comercialización y venta de café también a través de cafeterías y otros puntos de venta. Se han generado experiencias importantes en la diversificación de proyectos como la vivienda y productos como la miel y otros, cuentan con organismos de ahorro y préstamo y de financiamiento. Para esto se han formado diferentes figuras morales que han servido para acceder también a los recursos del programa PIAC del 2016 al 2018.

Desde la CNOCA se ha jugado un papel importante en la forma-

ción del FIRCAFE que para el 2018 contaba con cerca de mil millones de pesos de 320 mil productores aportantes. Este fondo se formó con las aportaciones de los productores y su objetivo era apoyar cuando los precios estuvieran bajos. Hasta junio del 2019 se habían regresado 520 millones de pesos a unos 110 mil productores aportantes.

En los meses previos a la elección presidencial de julio del 2018, se le explicó a quienes habían sido propuestos para el gabinete de López Obrador, que el mayor problema que enfrentarían si ganaban era la fuerte baja de precios del café pagado a los productores. Sobre esto se



planteó que continuara el programa de apoyo fiscal para la renovación de cafetales y que aumentaran los recursos para incluir hasta 250 mil productores, además se estableciera un apoyo fiscal compensatorio por los bajos precios de 1800 millones de pesos y con esto se apoyara a la mayoría de los productores de café.

Algunas cuestiones importantes en los pasados meses son:

**1 Nuevas plantaciones de café robusta para abastecer a la Nestlé.** En diciembre del 2018 se anuncia desde la Presidencia la inversión de la Nestlé para una nueva fábrica de café soluble en el puerto de Veracruz. No era algo nuevo, ya que esta planta se había anunciado antes en Coatzacoalcos. Ante los comentarios hechos desde la CNOCA, un funcionario del gobierno de Veracruz detalló lo que pretendía la empresa: se sembrarían a nivel nacional 150 mil hectáreas de café robusta y 80 mil en Veracruz con un rendimiento de unos 50 quintales por hectárea. El gobierno ubicaría los terrenos, organizaría a los productores y les proporcionaría subsidios para las plantas de café, asistencia técnica, créditos y apoyo en la negociación de los precios de venta con Nestlé. Ante las protestas de los productores, desde el gobierno estatal se citó a varios representantes de productores, les sacaron fotos y apareció en los medios como que declaraban que apoyaban el proyecto de la Nestlé y que representaban el 80% de los productores de café del estado. Era claro el interés de los funcionarios de la Sader y Sedecop en Veracruz de apoyar a toda costa el plan de la Nestlé.

Se generó un gran debate en los medios y fueron saliendo más datos, como el que la nueva planta sería para obtener 25 mil toneladas de café soluble, que serían principalmente para la exportación y necesitaban un 75% de café robusta, alrededor de 400 mil quintales. La cuestión era que la Nestlé habían sorprendido al gobierno y que-

ría que se subsidiara la producción de no menos de 5 millones de quintales de café robusta que en sus cuentas alegres era lo que necesitarían en el 2024, ya que triplicarían sus exportaciones de café soluble a Estados Unidos y otros países y por el aumento del consumo interno que calculaban podría tener un porcentaje mayor de café soluble con robusta. Pensaban sustituir las importaciones de café robusta de unos 1.8 millones de sacos y la otra parte destinarla al consumo interno.

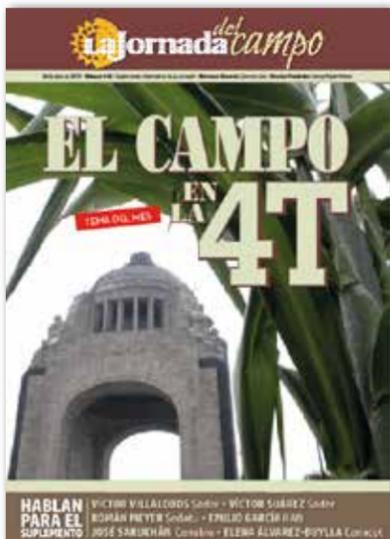
Desde el sector productor de café se argumentó que un fuerte aumento de la producción de café robusta en México contribuiría a la sobreproducción mundial de este café de precios más bajos y que era uno de los factores principales en la baja también de los precios de los cafés arábigos. Además desplazarían cafés arábigos lavados mexicanos en el consumo nacional. Que sería una competencia desleal de menores precios al consumidor cuando estaba disminuyendo el porcentaje del café soluble en el consumo nacional.

El 15 de enero se realizó una manifestación en el parque central de Xalapa con participación de productores de varios estados. Se consiguió una entrevista con los secretarios de la Sader y Bienestar Social el 25 de enero. En esta reunión los secretarios manejaron que no se subsidiarían las nuevas plantaciones de café robusta de la Nestlé. En los siguientes meses siguió la controversia y desde el gobierno de Veracruz se siguió promoviendo el proyecto de la Nestlé.

Después se supo que en el programa "Sembrando Vida" se apoyarían 7000 hectáreas con café robusta con sombra y serían para sustituir importaciones y cubrir la demanda de la Nestlé. Esta situación ha generado una imagen en buena parte de los productores de que empresas como la Nestlé siguen teniendo una fuerte influencia en los funcionarios y en las políticas para el café.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)

Entre los cafetaleros y las organizaciones hay desconcierto e incluso molestia por la manera en que se dan privilegios a la empresa Nestlé, la desarticulación en los programas para café entre diferentes dependencias y los pocos avances que hay en las demandas centrales que se plantearon al secretario de Agricultura.



# El tsunami migratorio

## ¿Quién mató a Oscar y Valeria?

Armando Bartra

**A**penas da sus primeros pasos, pero la 4T ya enfrenta los grandes retos de la política exterior. Y el hombre para el que no existía el mundo y ni siquiera tenía pasaporte, llama fuertemente la atención por su firme, hábil y eficaz manejo de los asuntos políticos externos.

En el período de transición, López Obrador evitó que Peña Nieto concluyera a su modo la negociación del T-MEC, obligándolo a aceptar la participación de un representante suyo, Jesús Seade, por cuya intervención se logró ratificar enfáticamente la soberanía de México en lo tocante al petróleo y que la vigencia del tratado fuera de 16 años y no de cinco como pretendía Trump.

En el caso de la fracasada ofensiva de los EU y de la OEA contra el gobierno legítimo de Venezuela y a favor del golpe de Guaidó, México sostuvo contra viento y marea la política de no intervención sustentada en la llamada doctrina Estrada y con Uruguay impulsó un mecanismo de negociación.

En el peliagudo caso de los migrantes y la amenaza de Trump de gravar progresivamente las importaciones mexicanas si no nos plegábamos a su política, México mantuvo sin variación su planteo de fondo: contrarrestar las causas mediante un programa de desarrollo para el sureste y Centroamérica. Proyecto que en nuestro país ya arrancó con Sembrando Vida Migrante, Emergencia Social, Viveros Forestales y Sistema Producto-Empresas.

De cobertura mesoamericana, el diseño del programa fue acompañado por la Cepal; se está concertando con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador; lo ven con simpatía la FAO y otras agencias de la ONU; cuenta con el apoyo de los mayores países europeos que ya aportaron recursos; fue recogido por el G-20 en la reciente reunión de Tokio y, a regañadientes, fue aceptado por EU.

En cuanto al creciente éxodo, México no modificó un ápice su política migratoria constitucional y su adhesión a los acuerdos internacionales al respecto. Postura consistente en abrir sus fronteras a quienes solicitan asilo en el país, y ordenar mediante visas humanitarias y acompañamiento, a los que van en tránsito.

Lo único adicional que ofreció -y ha venido cumpliendo- fue reforzar aceleradamente los controles en las franjas fronterizas, que antes eran insuficientes, laxos y, en lo tocante al INM, notoriamente viciados y corruptos. Porosidad y desorden que con las visas humanitarias y otras señales de paso libre, tuvieron un "efecto llamada" que incrementó dramáticamente el flujo humano, alentando a los promotores de caravanas, facilitando la acción criminal



Oscar y Valeria Martínez, un hombre salvadoreño de 25 años y su hija de casi dos años ahogados a orillas del río Bravo

de los traficantes de personas y poniendo en riesgo la vida de los migrantes.

Estrategia compleja y difícil de implementar que ciertamente no termina con el sufrimiento de los peregrinos, atrapados entre una Centroamérica inhabitable y un "sueño americano" que Trump se empeña en transformar en pesadilla, pero que cuando menos lo atenúa.

De hecho en el diferendo con México, el *showman* de la Casa Blanca reculó. Así lo reconoció Paul Krugman, Premio Nobel de Economía: "El presidente Trump cedió mientras fingía que ganaba". Atrapado entre su temeraria amenaza de imponer un 5% de arancel a las importaciones mexicanas y la oposición que generó entre los empresarios estadounidenses, los expertos y su propio partido, el bocón de Trump tuvo que tragarse sus palabras y aceptar que México siga haciendo lo que ya venía haciendo: en la frontera sur ordenar el ingreso de migrantes mediante visas humanitarias al tiempo que frena el indocumentado, y en la frontera norte recibir por razones humanitarias a quienes esperan que se resuelva su solicitud de asilo en EU sin aceptar las implicaciones que tendría ser tercer país seguro. Por su parte, aunque no ha definido plazos y montos, Trump tuvo que asumir la propuesta de México de atacar las causas de la migración mediante un programa de desarrollo.

A los que con tal de seguir atacando a López Obrador dicen que nos plegamos a las exigencias gringas, no les importa hacerse eco del hueco triunfalismo de Trump. Paul Krugman, en cambio, traduce así el discurso oculto tras los tuits del magnate: "Recibí tan poco a cambio de todas mis amenazas

que tengo que inventar victorias imaginarias (no hubo trato en productos agrícolas)".

Los exabruptos malinchistas de quienes proclaman que cedimos ignominiosamente, no han sido sin embargo desmentidos pues, paradójicamente, abonan la causa de México. Y es que lo que Trump realmente buscaba no era gravar las importaciones ni siquiera reducir efectivamente la migración que llega al Río Bravo, sino poder proclamar ante sus electores que él era el vencedor; que con sus desplantes de cantinero bravucón nos había metido miedo. Un precio muy bajo, que pagamos sin desdoro.

Adelante don Trump; si necesita alardear frente a sus electores, alardee tranquilo y siga con su campañita por el voto... Entendiendo que el interés de Trump era meramente comicial, México diseñó una jugada diplomática de filigrana: quebramos el cuerpo y el toro se fue tras de la capa.

Es posible que el éxodo inducido ceda -de hecho ya cedió significativamente- pero seguirá el estructural. De modo que seguiremos teniendo que lidiar con un problema cuyos detonantes no están aquí sino en Centroamérica y en EU. Culpabilizar del sufrimiento de los migrantes al gobierno de López Obrador que decidió abordarlo como una cuestión humanitaria, es injusto o interesado.

A todos sin excepción nos incumbe y estruja la muerte de Oscar y Valeria. Pero a la familia salvadoreña que cruzó México con visas humanitarias y llegó a un albergue de Matamoros para encontrarse con la frontera estadounidense cerrada, la mató la política migratoria de Trump, no la nuestra. •

# ¿Y los jornaleros?

Antonieta Barrón Profesora Facultad de Economía, UNAM

El primer presupuesto de egresos del gobierno actual se elaboró "considerando las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, priorizando los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas..." (PEF 2019), declaración que podría suponerse incluye a los jornaleros agrícolas, sin embargo, no es así.

En la reestructuración de la actual Secretaría de Bienestar, SB, desaparecieron algunos programas sociales, entre ellos las estancias infantiles y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, PAJA.

El argumento para desaparecer algunos programas sociales fue, según Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que varios programas sociales tenían fallas y en algunos casos eran tantas, que ameritaban su desaparición. En ningún momento esta Secretaría se planteó la reestructuración de los programas que, sin lugar a duda, desempeñaban un importante papel social, no obstante su mal manejo.

El PAJA nació en 2001, atendiendo a jornaleros en 10 entidades del país, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En ese año el PAJA estimaba que había más de 800 mil jornaleros migrantes.

El PAJA priorizó su atención en las zonas de atracción a partir de siete líneas de acción:

## VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

## SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

## ALIMENTACIÓN Y ABASTO

## EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

## EMPLEO

## CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

## PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Líneas de acción que no cambiaron con el cambio de reglas de operación

Con estos referentes, los promotores llevaban a cabo todas sus acciones, fomentaron la creación de guarderías en los albergues para que las madres jornaleras llevaran a sus hijos desde las 5 de la mañana; lograron que los patrones aportaran los alimentos de los niños y el pago de cuidadoras.

Promovieron que CONAFE les diera clases a los adolescentes en los campos agrícolas, que las mujeres jornaleras se atendiera,

llevarlas a los hospitales a parir, el traslado de algún enfermo o muerto, además de dar becas para estudiar a los hijos de jornaleros migrantes y apoyo en el traslado de las zonas de expulsión a las zonas de atracción.

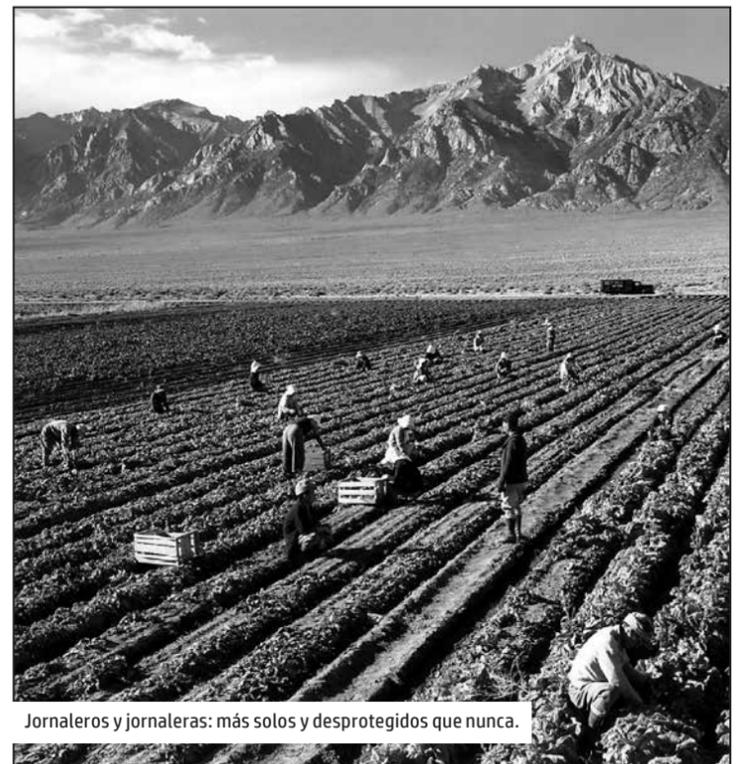
En las regiones de origen de los jornaleros el Programa vigilaba que los jornaleros migraran en condiciones de seguridad, registraba las empresas de destino, si había algún accidente se encargaba de apoyar a los jornaleros para resolver las dificultades que se presentaban.

En materia de procuración de justicia, durante el tránsito migratorio, principalmente en el caso de los indígenas, se presentaban muchos casos de violación de los derechos de los jornaleros y sus familias; la carencia de actas de nacimiento, que los acreditara como ciudadanos mexicanos, propiciaba y propicia que con frecuencia se les niegue el acceso a determinados servicios públicos, haciéndoles más susceptibles a los abusos y despojos, situación que se agrava por el desconocimiento que tienen los jornaleros de sus derechos civiles y de las instancias a las que pueden acudir para su defensa".

Alguna violación a sus derechos, un patrón que no pagaba, un jornalero que se quedaba sin trabajo y no lo regresaban a su lugar de origen, el PAJA, acudía en su ayuda.

En las zonas de expulsión y algunos centros de atracción construyeron las Unidades de Servicios Integrales, USI, que eran centros de acogida de jornaleros mientras migraban o encontraban trabajo, allí se les daba un espacio donde dormir y las comidas por cuotas de recuperación simbólicas.

En 2012, cuando aún había cierta actividad del PAJA, el programa



Jornaleros y jornaleras: más solos y desprotegidos que nunca.

operaba en 21 entidades, además de las señaladas incorporó a Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y Michoacán, y se quedaron en diagnóstico, Chiapas, Coahuila, Zacatecas y Colima, con 1,200 promotores sociales trabajando en campo.

En 2017, desintegrada la red de promotores, apenas atendieron a 76,342 jornaleros, básicamente con apoyo en el traslado de su lugar de origen a las zonas de atracción.

Es cierto que inclusive en el apoyo para el traslado de jornaleros no había control, que operaba de forma simbólica el programa con 296.48 millones de pesos, que casi no existía, pero la respuesta a las formas de operar del PAJA fue su desaparición, sin ninguna alternativa para su atención.

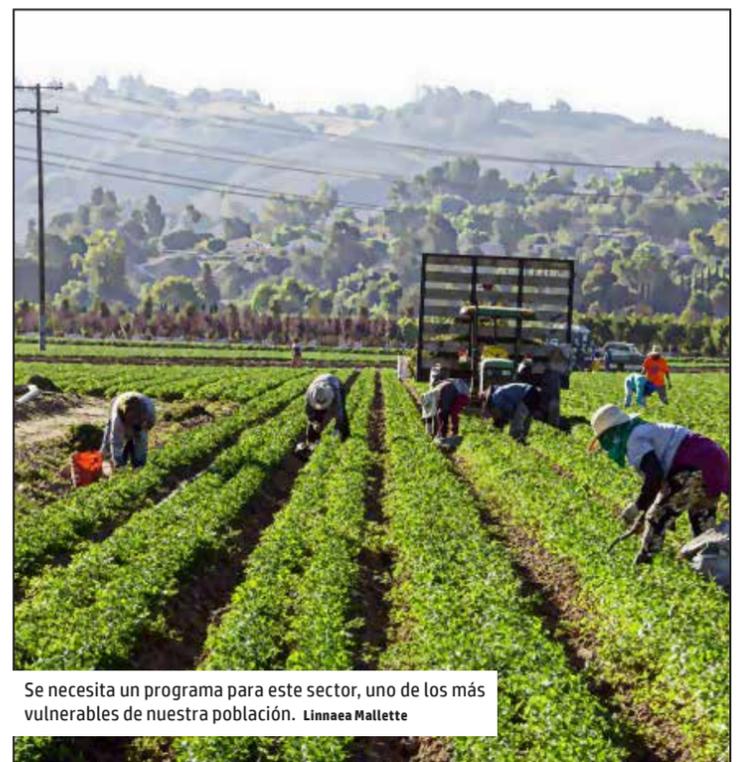
En el perfil de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar desapa-

reció la figura de asalariados y en su lugar le asignó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 39 millones de pesos para atender a los jornaleros.

Hay 1.5 millones de jornaleros migrantes de los cuales el 40% son indígenas. Los abusos se han vuelto una constante entre estos jornaleros migrantes, la indefensión y maltrato son diarios y no hay respuesta para ellos.

La Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, desapareció muchos programas, por las razones que sea, por el mal manejo, se dice, y en su lugar instrumentó nuevos programas donde cerca del 60% son transferencias en dinero que no combaten la pobreza.

Es cierto que el PAJA no funcionaba, pero la respuesta de un gobierno justo era rehacer el programa y atender a los jornaleros, hijos olvidados del régimen. •



Se necesita un programa para este sector, uno de los más vulnerables de nuestra población. Linnaea Mallette

Durante el tránsito migratorio, principalmente en el caso de los indígenas, se presentaban muchos casos de violación de derechos de los jornaleros y sus familias. La carencia de actas de nacimiento, que los acreditara como ciudadanos mexicanos, propiciaba y propicia que con frecuencia se les niegue el acceso a determinados servicios públicos, haciéndoles más susceptibles a los abusos y despojos, situación que se agrava por el desconocimiento que sus derechos.



La diversidad es una parte de la complejidad social.

# Mitos y realidades sobre la violencia en los municipios rurales

Francisco Robles Berlanga Maestro en Políticas Públicas Comparadas, Flacso

**M**uchos han sido los esfuerzos orientados a estudiar el fenómeno de inseguridad y violencia que vive México. Sin embargo, tales denuestos analíticos han dejado de lado lo que sucede en el campo.

Por ser una realidad compleja, la violencia rural demanda ser mirada y analizada a partir de paradigmas que ayuden a entender la manera en cómo se construye esa complejidad que, por el contexto en el que se da (estructuras-agentes-dinámicas-interrelaciones), presenta una especificidad y composición propia.

La diversidad es una parte de la complejidad social. Ni siquiera la violencia que se presenta en el campo es igual en todas sus regiones y municipios, varía, no solo, en cuanto a sus causas, actores, expresiones y efectos, sino también en cuanto al marco institucional y cultural en el que se construye y recrea.

Resulta indispensable abordar con seriedad y profundidad la problemática de violencia rural. Hacerla visible permite establecer las bases para la construcción de una política pública capaz de darle respuesta pertinente.

Aunque es necesario contar con un análisis basado en cifras delicti-

vas actuales, la información delictiva correspondiente a 2017 aporta indicios de lo que está pasando en el campo. De acuerdo con ella:

- a) En los municipios rurales se registra al menos una cuarta parte de la violencia letal que afecta al país. En 2017, se registraron en ese ámbito 6,731 muertes violentas, que representaron el 26.6% del total nacional.
- b) La violencia rural se concentró en 1187 municipios, el 57.3% de los 2072 municipios rurales existentes en el país, fenómeno que afectó -directa o indirectamente- a 33.2 millones de personas.
- c) En promedio la tasa de homicidios dolosos en los municipios rurales, es menor a la que registran los municipios urbanos. En 2017, los primeros observaron una tasa 16.9 homicidios intencionales por

cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa urbana fue de 22.2.

- d) No sucede lo mismo con los municipios rurales que registran contextos de violencia, en cuyo caso las tasas son más elevadas que el promedio observado para el campo. En estos municipios, la tasa se colocó en 20.3 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, cerca del promedio nacional y 3.4 homicidios mayor al promedio rural.
- e) Los datos indican que existe una correlación moderadamente alta (0.6946) entre el tamaño de la población municipal y el número de homicidios dolosos registrados.
- f) De igual forma, se observa una correlación menor y de signo negativo (-0.3682), entre el nivel de ruralidad y el número de homicidios dolosos. De tal manera que, a mayor ruralidad es menor el número de homicidios registrados.

Relacionar la pobreza con la inseguridad es un postulado atractivo y poderoso para muchos que ven en él “la explicación” a uno de los graves problemas que enfrenta el país. Es también un postulado falso.

- g) Las correlaciones estadísticas entre el tamaño de la población y entre el nivel de ruralidad con el número de homicidios dolosos muestran que la violencia es un fenómeno tendencialmente urbano, pero no únicamente urbano, también se encuentra en las zonas rurales, aunque su magnitud es menor, no necesariamente lo es su intensidad.
- h) Entre más alta es la proporción de la población indígena en la población municipal, la correlación con los homicidios dolosos se vuelve inversa (-0.104), es decir: entre más indígena es el municipio menor es el número de homicidios registrados.
- i) La falta de correlación entre las variables población y nivel de ruralidad con la tasa de homicidios dolosos indica que la violencia puede ser igualmente grave en los municipios rurales como en los urbanos.
- j) A diferencia del llamado sentido común que relaciona pobreza y violencia, la evidencia indica que a mayor pobreza es menor la violencia letal registrada (-0.213).

Es común que la pobreza, la desigualdad y la marginación sean señaladas como las principales causas de la violencia delictiva. Sin embargo, los datos sobre homicidios dolosos recabados cuestionan el contenido de esta narrativa construida más sobre bases ideológicas que sobre realidades y evidencias.

Relacionar la pobreza con la inseguridad es un postulado atractivo y poderoso para muchos que ven en él “la explicación” a uno de los graves problemas que enfrenta el país.

Es también un postulado falso, pues supone que los individuos en general y los pobres en particular son capaces de elegir un curso de acción que les permita maximizar el beneficio esperado; es decir, escoger entre mantener su status quo (aguantar vara), emigrar para huir de la violencia, con la carga de incertidumbre que el desplazamiento conlleva o incorporarse a alguna actividad delictiva con beneficios inmediatos. La teoría de la elección racional supondría que esta última es la mejor opción.

Este razonamiento sobre el comportamiento humano presupone que el objetivo único de las personas es buscar su propio beneficio: los individuos son concebidos como seres egoístas, carentes de capacidades para cooperar socialmente y ajenos a sus contextos proximales en

los que interactúan, nada más equivocado.

Por el contrario, los individuos son seres con motivaciones y emociones tamizadas por factores culturales idiosincráticos, así como por normas y principios que se adquieren en la familia y la comunidad, mismas que orientan sus valoraciones y comportamientos (Lara A., 2015: 7-26). De tal suerte que la pobreza no lleva directamente a la criminalidad ni tampoco la cancela.

Las elecciones que toman los individuos (estrategias contingentes) se dan en un mundo con diversidad de agentes, valores morales y situaciones, la manera en que estos elementos se combinan, origina o cancela las condiciones que inciden en la propensión de una persona a delinquir.

Aún más, la lógica de la elección racional lleva a construir soluciones simples a problemas complejos. Con ella, se hace caso omiso del papel que tienen en el comportamiento de los individuos las reglas institucionales, los atributos de la comunidad y los recursos disponibles. Asociar pobreza con delincuencia, “sugiere una visión mecánica y lineal del mundo social; no deja espacio para la contingencia, la emergencia, la historia, el contexto, las agencias y la capacidad de reflexión humana”.

Finalmente, frente al postulado de que las carencias socioeconómicas son fuente u origen de la violencia, la política social, particularmente la de combate a la pobreza, es llamada a ser su solución, capaz de generar los incentivos suficientes para modificar el comportamiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, evitando su involucramiento en hechos delictivos por razones económicas.

Suponiendo que ello sea cierto, el problema se centra entonces en la focalización y el contenido de la política social, toda vez que combatir la pobreza y reducir la inseguridad son dos objetivos de política pública diferentes, con especificidades propias, lo cual plantea un problema de diseño y concepción.

Al cruzar los datos de homicidios dolosos con los 1115 municipios rurales que integran las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), encontramos que no existe un vínculo estadístico. No todos estos municipios se encuentran entre los más afectados por la violencia delictiva, aunque sí tienen las mayores tasas de pobreza. De tal manera que, entre mayor es el nivel de pobreza registrada en los municipios rurales ZAP, menor es la incidencia de homicidios (-0.1877886) observados en ellos. •